

Vim.
C.A. de Valparaíso

Valparaíso, veintisiete de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

En causa RIT N° 342-2021 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, por sentencia definitiva pronunciada con fecha dieciocho de abril del presente año, se condenó a Renato López Fuentes como autor del delito de homicidio calificado, en grado de consumado, en la persona de Alejandro Correa, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo y accesorias legales, perpetrado en la comuna de Concón, el día 18 de mayo del 2020. Se condenó, asimismo, a Claudio Esteban Riveros Canales, como autor del delito de homicidio, en grado de consumado, en la persona de Alejandro Correa, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales; además, se le condenó como autor del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 2 letras b) y c), en relación con el artículo 9 de la Ley N° 17.798 -al que se le subsumió el delito de porte de municiones del artículo 13 del mismo cuerpo legal, en concurso con el delito de receptación-, a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y accesorias legales. Se condena, también, a la acusada Melissa Fernanda Palma Valdés, en calidad de cómplice del mismo delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en grado de consumado, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales.

En contra de dicha sentencia, todos los condenados precedentemente mencionados, presentaron sendos recursos de nulidad.

La defensa de Melissa Fernanda Palma Valdés –abogado don Andrés Roldán Rivera-, lo funda en las causales consagradas en los artículos 373 letra a) y 373 letra b) del Código Procesal Penal, las que interpone una en subsidio de la otra. Solicita, por la primera, que se declare nulo el juicio y la sentencia determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento; por la subsidiaria, pide que se dicte sentencia de reemplazo en la que aplicando correctamente el derecho, se resuelva absolver a su representada.

A su vez, el abogado señor Claudio Uribe Hernández, por su representado Renato López Fuentes, lo sustenta en las causales de los artículos 373 letra a) y



373 letras e) y b) del Código Procesal Penal, las que presenta de manera subsidiaria. Pide –por la principal y primera invocada en subsidio-, que se declare la nulidad del juicio oral y la sentencia, remitiendo los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda, para la realización de un nuevo juicio oral. Por la última, peticiona la nulidad del fallo y que se proceda a dictar sentencia de reemplazo, que condene a su representado como autor del delito de homicidio simple del artículo 391 inciso final -ha de entenderse del Código Penal-, fijando una pena atendidas las circunstancias modificatorias reconocidas en el fallo.

Por su parte, el Defensor Penal Público, don Cristian Sandoval Díaz –por el condenado Claudio Esteban Riveros Canales-, lo fundamenta en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, solicitando que se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que califique como cómplice la participación de su defendido en el delito de homicidio simple, y se acoja la eximente especial del artículo 14 letra c) de la Ley N° 17.798, prescindiendo de aplicar pena alguna a su representado, por el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

Elevados los antecedentes ante la Excm. Corte Suprema para el conocimiento de los recursos de las defensas de Melissa Fernanda Palma Valdés y Renato López Fuentes, al haberse invocado en ambos la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ordenó remitir los antecedentes a esta Corte para que -previa revisión en cuenta de la admisibilidad de los recursos-, fije audiencia para su conocimiento y fallo, por constituir las causales referidas un reclamo propio de aquella del artículo 374 letra e) del mencionado texto legal.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de la defensa de Melissa Fernanda Palma Valdés.

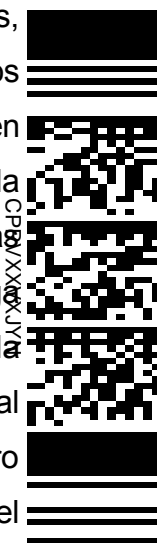
1°) Que el recurrente –luego de copiar, de manera parcial, el considerando vigésimo del fallo, donde se dan por establecidos los hechos-, invoca la primera causal de nulidad, fundado en que durante el juicio y la dictación de la sentencia se ha infringido sustancialmente el derecho a la presunción de inocencia o no culpabilidad, reconocida en la legislación internacional y chilena –de acuerdo las normas que cita-, aludiendo, además, a jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema. Sostiene que “la presunción de inocencia solo puede ser desvirtuada por la prueba legalmente producida y apreciada por el Tribunal, pero no cualquier



prueba, sino aquella que entre otros requisitos haya sido legalmente obtenida y debidamente contradicha por la defensa, de modo de otorgar legitimidad al enjuiciamiento y a la sentencia que es su corolario.” (Sic). En seguida, procede a describir los hechos y antecedentes de la causa, afirmando que los sentenciadores no acogieron la teoría de la defensa en orden a absolver a su representada, por las razones que indica, arribando –por el contrario-, a la convicción de la participación de ella, en calidad de cómplice, del delito de homicidio perpetrado por Gutiérrez Londoño, la que sostiene no se pudo tener por establecida “sin violar la Constitución Política, los Tratados Internacionales y normas vigentes.” (Sic). Agrega que: “Los hechos respecto de los cuales se deduce la culpabilidad no son unívocos ni suficientes, por el contrario son débiles y abiertos y por ende ineptos para deducir de estos de manera inmediata y necesaria la conclusión de que la acusada tuviese la calidad de Cómplice del delito por el cual fue condenada. De este modo SS., queda claro que el establecimiento de la culpabilidad de mi representada es oscura, arbitraria y claramente insuficiente para vulnerar la presunción de inocencia que le beneficiaba, tornándose la sentencia en infundada para los efectos de establecer la Complicidad de la acusada.” (Sic). Cita otra jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

2°) Que como ya se indicó, la causal precedentemente referida -la del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal-, fue reconducida por la Excelentísima Corte Suprema a la del artículo 374 letra e) de dicho cuerpo legal.

3°) Que la presente causal está referida a la presunta omisión en la sentencia de los requisitos que establece el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, el que prescribe que aquélla contendrá: “La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. A su vez, esta última norma, dispone: “Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”. Agrega el inciso segundo: “El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”. El inciso tercero concluye: “La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del

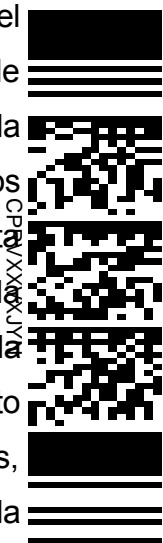


o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

4°) Que según se ha dicho siempre, el recurso de nulidad no puede ser sede para debatir acerca del mérito de la prueba rendida y su valoración, ya que la apreciación de la prueba y las conclusiones obtenidas de ella, se encuentran dentro del ámbito de la convicción propia y exclusiva del tribunal de mérito, adquirida a través del principio de inmediación, luego de debate público y contradictorio, sino exclusivamente para revisar el cumplimiento de las diferentes garantías que el ordenamiento reconoce a los intervinientes y en la medida que se hubiere producido una violación de éstas. En este sentido, la causal invocada, que se relaciona con la estructura sustancial de la sentencia, protege la garantía de la razonabilidad de la misma, particularmente en su determinación fáctica, en la medida que exigiendo la ley valoración acorde a las reglas de la sana crítica, ella no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados; o, en otros términos, la causal permite controlar el respeto a las señaladas reglas de la sana crítica.

5°) Que como fácilmente se puede advertir del tenor del recurso, en las alegaciones formuladas no se especifican cuál o cuáles de las reglas o principios de la lógica formal habrían sido conculcados y de qué manera; lo mismo sucede con las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, lo que impide todo análisis a su respecto.

6°) Que en todo caso, de la simple lectura del considerando vigésimo primero de la sentencia -donde se analiza y valora la prueba producida en juicio-, aparece que ella cumple con las exigencias que impone el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, ya que contiene una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados y se hace la valoración de los medios de prueba que fundamentan sus conclusiones, en los términos que exige el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin que se advierta contradicción alguna con los principios de la lógica, con las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, razonando dentro de la libertad que los sentenciadores tienen al efecto, para estimar por acreditados tanto los delitos como la participación que les cupo en ellos a los diferentes acusados, cumpliéndose así con las exigencias de fundamentación y razonabilidad de la



sentencia, permitiendo reproducir fácilmente el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que se llega.

7°) Que conforme a lo expuesto, ha de desestimarse la causal principal de nulidad esgrimida.

8°) Que de manera subsidiaria, el recurrente alega la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, fundado en que la sentencia incurriera en una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al dar por establecida la complicidad de su representada en el delito, en los términos del artículo 16 del Código Penal, sin que los hechos probados en el juicio oral se puedan subsumir en el tipo penal de la norma citada, ya que “lo único que la vincula al hecho punible, es en primer lugar haber sido la pareja de Gutiérrez Londoño, un video capturado desde su teléfono celular de las inmediaciones y casa de la víctima, fotografías con dinero y fotografía de un arma de fuego que al parecer fue la utilizada por el autor de estos hechos, lo que en definitiva, aumenta la ponderación de la presunción de inocencia de mi representada, atentando con ello gravemente al debido proceso” (Sic).

9°) Que el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, prescribe que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia cuando, en el pronunciamiento de ésta, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

10°) Que el artículo 16 del Código Penal, establece: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.”

11°) Que el tribunal, en el considerando trigésimo de la sentencia, razona al respecto de la siguiente manera:

“TRIGESIMO: Participación culpable de la acusada Melissa Palma Valdés en calidad de cómplice, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, en el delito de homicidio, en grado de consumado, en la persona de Alejandro Correa Correa.

Que, la misma prueba de cargo que ha sido explicada en el considerando decimoquinto supra, junto con aquella que en lo pertinente se adicionará continuación, especialmente **evidencia ofrecida con el N° 25 de otros medios de prueba, imágenes N° 1, 2, 4, 5, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12 y N° 13, otros medios de prueba N° 26 y 27, y evidencia ofrecida con el N° 29 y N° 74** que fueron exhibidos al comisario Rodrigo López, permiten acreditar que la

CPM/XXX/XX/YY

intervención de Melisa Palma Valdés, en el delito de homicidio del Sr. Alejandro Correa Correa, se enmarca en la hipótesis de complicidad, conforme al artículo 16 del Código Penal, norma que sanciona a los que no siendo autores cooperan a la ejecución del hecho ilícito por actos anteriores o simultáneos.

Se acreditó, más allá de toda duda razonable, conforme al mérito de la prueba que a continuación se detallará, que el día anterior al homicidio del Sr. Correa, la encausada Melisa Palma Valdés, en conocimiento del delito que se iba a perpetrar al día siguiente, acompañó y prestó cooperación a los coacusados Gutiérrez Londoño –*quien era su pareja*- y Riveros Canales para el delito que ambos se prestaban a cometer a primeras horas del día siguiente.

En concreto, los acompañó, en el vehículo que iban a utilizar, hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima y grabó en su propio teléfono celular parte del trayecto, incluso haciendo comentarios de posibles vías de escape, acciones inequívocamente tendientes a facilitar el crimen y que fueron aprovechadas por los autores directos.

En efecto, el funcionario encargado de la investigación de este complejo caso, Comisario Rodrigo López, explicó en detalle cómo luego de perpetrado el deleznable crimen se pudo llegar a determinar la intervención del sujeto encargado de llevar y retirar de la escena al disparador, esto es, al conductor del automóvil, el acusado Claudio Riberos Canales. El mismo agente policial explicó cómo fue que éste último, al verse cercado, declaró que el día anterior al hecho concurrió en su vehículo junto al coacusado Gutiérrez Londoño y la pareja de éste, Melisa Palma.

El policía junto con reconocer en estrados a Melisa Palma Valdés, relató, también, cómo con fecha 21 de mayo del 2020, se logró ubicarla, confirmar su relación amorosa con Gutiérrez y obtener de manera voluntaria su teléfono celular, marca Nokia modelo TA1149 (otros medios N° 6) del cual se extrajo importante información que da cuenta del conocimiento del delito y de la colaboración que prestó el día anterior.

Así, desde el teléfono celular en cuestión se obtuvieron mensajes de audio, fotografías y un video en que se ve la intervención de la acusada en cuestión. En las fotografías que fueron exhibidas al policía López se observó Melisa Palma cuando manipulaba el revólver usado en el crimen y posaba de forma jactanciosa con una importante cantidad de billetes de \$20.000, todas imágenes creadas el mismo día 18 de mayo del año 2020. En el video, extraído

CPS/XXX/YY

del mismo aparato móvil, se advierte que la acusada Palma iba en la zona posterior de un automóvil y graba el recorrido. Se ve que el conductor era Claudio Riveros Canales y como copiloto a Víctor Gutiérrez Londoño. Según explicó el Comisario López y conforme apreciaron los jueces, en el mismo registro se ve cuando la acusada filmaba el frontis del domicilio del Sr. Correa, ubicado en calle Bosques de Montemar N° 1295 en Concón. En la parte final incluso se escucha cuando la propia Melisa Palma hacía referencia a un sector por donde los coimputados podían huir, en concreto se oye cuando expresa *“te podis tirar pa abajo y después pa arriba”*. En el mismo registro también se escucha cuando Claudio Riveros Canales hacía referencia a la existencia de unas cámaras de seguridad que podrían registrar el hecho. Todo es indicativo que hacían un recorrido de estudio del sitio de suceso. La acusada colabora grabando el recorrido y sugiriendo vías de escape.

Pues bien, conforme a lo antes señalado, no hay duda que Melisa Palma tenía cabal conocimiento del delito que estaba por perpetrarse al día siguiente.

Sobre el particular, el mismo agente policial explicó cómo desde el teléfono celular de Melisa Palma se extrajeron audios en que se escucha cuando su pareja, Gutiérrez Londoño, le hacía presente a Claudio Riveros que había subestimado su pago con frases tales como *“de haber sabido que el tipo era tan connotado hubiese cobrado más”* y *“el huevón costaba más de lo que cobré.”* Es más, en su propia declaración policial, presenciada por el Comisario López, la acusada Melisa Palma reconoce que el día el 17 de mayo de 2020, fue junto a Claudio Riveros y Víctor Gutiérrez Londoño hasta calle Bosques de Montemar de Concón, y que vio que éste último llevaba un papel en que estaba escrita la dirección indicada y el nombre de Alejandro Correa. En esa misma declaración Melisa Palma manifestó a la policía que el día 18 de mayo del 2020, en horas de la tarde, Gutiérrez Londoño llegó con muchos billetes de \$20.000, cerca de \$2.500.000, y reconoce que se tomó fotografías con esos billetes y con el revólver que portaba Gutiérrez. El policía explicó que en esa misma declaración Palma señaló que en más de una ocasión escuchó decir a Víctor Gutiérrez Londoño que tenía un jefe llamado “Renato” y que por el trabajo que había realizado ese día 18 de mayo le habían pagado \$5.000.000.

Ahora bien, probadas las acciones de colaboración realizadas por la acusada en cuestión y el conocimiento del delito, es menester hacerse cargo de la solicitud de absolución de su abogado que estimó que su intervención no tuvo



incidencia en el curso causal de delito, alegación que desde luego no se comparte porque no tiene asidero legal y dogmático. La doctrina penal señala que cómplice es *“quien coopera dolosamente a la ejecución del hecho de otro por actos anteriores o simultáneos.”*⁷ y es menester que *“la cooperación sea dolosa, pero no necesariamente causal: basta con un auxilio que facilite o haga más expedita la ejecución del hecho, aunque sin aquel éste también hubiera podido realizarse. De este modo el simple auxilio intelectual o moral es suficiente.”*⁸

La decisión del tribunal de castigar como cómplice a la acusada Palma también encuentra asidero en la jurisprudencia de los más altas Cortes. Así, basada en la *“teoría ontológica del dominio del hecho”*, se resolvió que cómplice es *“quien coopera dolosamente en la ejecución de un hecho ajeno y que, por consiguiente, actúa con un dolo que le es propio, pues su finalidad es que el autor alcance su designio criminal. Su cooperación puede ser simultánea o anterior a la ejecución del hecho y siempre es accesoria, o residual, no teniendo el dominio del hecho, consistiendo su actividad en una mera colaboración.”*⁹; basada en el *“criterio normativo amplio de autor”*, para la cual complicitad es *“la ayuda, auxilio o cooperación, accesoria o secundaria que se presta a otro para la ejecución de un delito por actos anteriores o simultáneos a su ejecución.”*¹⁰; y basada en la *“necesidad de la aportación para la consumación del hecho”*, se ha sostenido que *“Si la contribución del sujeto no es decisiva en el ilícito, pudiendo haberse llevado a cabo éste sin la participación del sujeto, la participación de este es de cómplice.”*¹¹

Así, sobre la base de la prueba rendida en el juicio, doctrina y jurisprudencia pertinente al caso de marras, es que se ha decidido enmarcar su participación en la hipótesis prevista en el artículo 16 del Código Penal, según se informó en el veredicto.” (Sic).

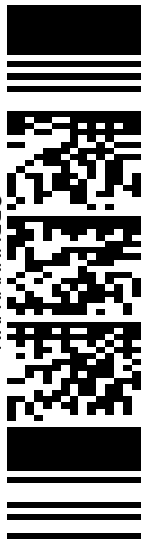
12°) Que conforme a lo razonado por los sentenciadores, teniendo además en consideración que los hechos establecidos resultan inmutables de acuerdo a la causal de nulidad que se conoce, no se puede menos que compartir sus conclusiones, en el sentido que la participación de Melisa Palma Valdés en el hecho ilícito que se le atribuye es efectivamente la de cómplice, y como consecuencia de ello, no es posible entender que al así haberlo decidido se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.



13°) Que conforme a lo expuesto, solo cabe desestimar también esta segunda causal de nulidad, y con ello, el arbitrio deducido.

En cuanto al recurso de la defensa de Renato López Fuentes.

14°) Que este recurrente también deduce como causal principal la del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, fundado en que “tanto en el procedimiento, como en el desarrollo del juicio oral y en la sentencia se han infringido sustancialmente derechos y garantías aseguradas por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.” (Sic). Afirma que apartarse de la letra y espíritu de las normas que cita constituye infracción grave del debido proceso, relacionado con el derecho a defensa, lo que fue cometido “por la Policía, el Ministerio Público y el propio Tribunal de Garantía.” (Sic). Señala que las infracciones de garantías fundamentales cometidas por la Fiscalía, se producen por el hecho de haber abierto dos causas con ocasión del ilícito investigado, la segunda sin sustento legal alguno, encontrándose el primer indicio de ella en un correo electrónico enviado por el fiscal de la causa a la Brigada de Homicidios, instruyendo diligencias para ubicar al supuesto “autor intelectual” del homicidio, reiterando luego indicaciones, con mucho mayor detalle, en un nuevo correo, el que es tajante y reiterativo en la necesidad de mantener los antecedentes del procedimiento en reserva. Expone que queda claro que al menos desde la fecha que indica, la Fiscalía de Viña del Mar llevó adelante dos investigaciones paralelas sobre el mismo delito, situación inexplicable desde el punto de vista lógico, que tuvo la evidente motivación de que las defensas no se enteraran de las diligencias que se estaban realizando, evadiéndose con ello el inciso segundo del artículo 182 del Código Procesal Penal, que reproduce; dice aceptar que si bien los incisos tercero y siguientes de la norma contemplan la necesidad de que en determinados casos la investigación sea reservada, se establecen ciertos requisitos y limitaciones, los que refiere. Añade que “al crear una segunda carpeta de investigación, la Fiscalía logró evadir todos y cada uno de los límites y controles establecidos por el artículo 182, burlando de esa manera los derechos que el artículo en cuestión establece en favor de todos los intervinientes.” (Sic); en seguida, expresa que la única norma que faculta al Ministerio Público para separar investigaciones es el artículo 185 del Código Procesal Penal, disposición legal que copia, cuya aplicación al caso que se conoce no comparte por las razones que entrega. Manifiesta que el “objetivo de fondo (mantener a las defensas en la ignorancia absoluta de lo que ocurría), este



objetivo fue ampliamente logrado por la Fiscalía. De hecho, la investigación se mantuvo oculta por al menos 90 días (entre el 22 de mayo y el 19 de agosto de 2020). Esto es, más del doble del tiempo previsto por la ley. Durante ese tiempo, y por las razones ya expresadas, ninguna de las defensas pudo ejercer los derechos que el legislador consagra.” (Sic), infringiéndose así la garantía fundamental contemplada en el inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, norma que transcribe, al igual que el inciso 1° del artículo 3° de la Ley N° 19.640. A continuación, asevera que durante el procedimiento se cometieron infracciones a garantías fundamentales por parte de la policía, que claramente afectaron los derechos, entre otros, de su representado. Sostiene que el día que menciona se verificó la detención del imputado Víctor Gutiérrez Londoño, por orden judicial, la que fue narrada durante el juicio por el Comisario de la Brigada de Homicidios Rodrigo López, luego de la cual y sin presencia de su abogado defensor, hace entrega de su teléfono celular, se supone voluntariamente, lo que es absolutamente inverosímil, dado el contexto en que ocurre; adiciona que el aparente sustento normativo de la incautación del celular, estaría dado por el artículo 217 del Código Procesal Penal, norma que dice que aquella debe ocurrir en virtud de una orden judicial, la que no existía; reconoce que la norma contempla como excepción la voluntariedad de la entrega, pero asegura que es evidente que el detenido no se encontraba en una situación en que su voluntad fuese mínimamente autónoma. Alude a la trascendencia de la infracción. Más adelante, aduce que su representado, Renato López, fue detenido en virtud de orden judicial que consta en el oficio que indica, suscrito por la magistrado que identifica, el que contiene además una autorización para la entrada y registro al inmueble que se consigna, para la incautación de los objetos que se precisan y la toma de muestras caligráficas del detenido. Por último, se autorizó la toma de muestras caligráficas de Renato López. Alega que el domicilio determinado correspondía a Avenida Viña del Mar 153, pero el registro en verdad ocurrió en Avenida Viña del Mar 163, lo que fue atribuido por el oficial a cargo a un “error de transcripción”, pero el mismo policía, en su declaración ante el tribunal, dijo que no había ninguna numeración visible. Sin embargo –refiere-, “la más llamativa de las infracciones se produce porque según señala el informe de la PDI de fecha 18 de agosto de 2022, en el marco de la orden de incautación se incautaron un cuaderno universitario Artel con la leyenda UNAB en su tapa, una agenda de bolsillo con la



leyenda UNAB en su tapa y; por último; la cantidad de 8.528.000 pesos. Al respecto, ninguna de estas especies figuraba; ni aún de forma genérica; en la orden de incautación, la que se limitaba a armas y equipos electrónicos.” (Sic). Por último, se remite a la infracción de garantías fundamentales cometidas por el tribunal de garantía; hace mención de la inhabilidad que afecta a la magistrado que señala, pero no obstante ello, antes de la fecha que menciona, intervino en la causa dando importantes autorizaciones, incluyendo órdenes de detención, de entrada y registro e incautación e interceptaciones telefónicas, refiriéndose finalmente a la trascendencia de la infracción.

15°) Que la causal precedentemente referida –la del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal-, como anteriormente se dijo, fue reconducida también por la Excma. Corte Suprema a la del artículo 374 letra e) de dicho cuerpo legal.

16°) Que habiendo el recurrente interpuesto como primera causal subsidiaria, la misma a la que fue reconducida la principalmente deducida, se procederá a exponer los argumentos en que ella se sustenta.

17°) Que se sostiene en el arbitrio que el artículo 297 del Código Procesal Penal, en su inciso final, trae un requisito que en este caso no se respetó, cual es el de valorar la prueba y señalar los medios probatorios por los cuales el tribunal acredita los hechos, agregando que esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega. Reproduce el recurrente el considerando vigésimo del fallo, donde se establecen los hechos que se dan por acreditados, los que se califican como constitutivos de un delito de homicidio calificado, acreditando las circunstancias segunda y quinta del artículo 391 del Código Penal. Para llegar a esta conclusión respecto de su representado Renato López, a quien se sindicaba como el autor intelectual del crimen, el tribunal se basó en algunos medios de prueba que detalla en el considerando vigésimo octavo, los que resume. Expone que “el Tribunal Oral da por acreditados algunos hechos que simplemente no fueron objeto de prueba alguna. A mayor abundamiento, los infiere sin que existan antecedentes mínimamente suficientes para reproducir la línea argumental a la que llegó el Tribunal. Así el tribunal acredita que: 1.- RENATO LOPEZ contactó a VICTOR GUTIERREZ. 2.- Que le ofreció una suma de dinero. 3.- Que le proporcionó información para cometer el delito. 4.- Que luego de cometido el delito le pago una suma de dinero previamente acordada. Sin embargo, cuando se analizan los medios de prueba entregados en el juicio se descubre que



simplemente no hay un nexo lógico, menos necesario, entre los antecedentes vertidos en el juicio y las conclusiones a las que arriba el tribunal. Huelga decir que no hubo ninguna prueba directa de las conclusiones del Tribunal Oral. Sin embargo, lo que es más grave, tampoco hubo premisas lógicas que permitan llegar a la conclusión supuestamente ineludible a la que se llegó. Tal es la orfandad probatoria que el Tribunal simplemente prescinde de una exposición mínimamente detallada de cómo llega a sus conclusiones y se dedica más bien a tratar de descartar las explicaciones alternativas que daba la defensa. Lo anterior, casi en el límite de invertir la carga de la prueba. De esta manera, no cumple lo ordenado por el artículo 297 del Código Procesal penal en su parte final y, por lo mismo, no cumple con lo dispuesto por la E.” (Sic).

18°) Que en lo que concierne a estas causales de nulidad, se deberán tener por reproducidos los considerandos tercero y cuarto que anteceden.

19°) Que los hechos que el tribunal tuvo por establecidos en la motivación vigésima de la sentencia, son los siguientes:

“En el mes de Septiembre del año 2019, la víctima Alejandro Correa Correa, presentó ante el 1er. Juzgado Civil de Quilpué una demanda de comodato precario contra el acusado Renato López Fuentes, representante legal de la sociedad “Rellenos Controlados R Y A SPA”, dado que éste habría ocupado terrenos de su propiedad, ubicados en dicha comuna, libelo que dio origen a la Causa Rol C-2125-2019.

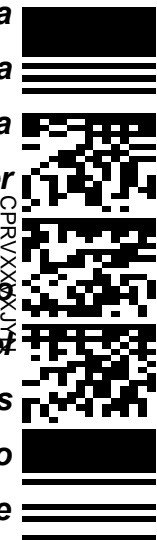
Estando vigente la causa civil, el acusado Renato López Fuentes decidió dar muerte a Alejandro Correa, para cuya planificación y posterior materialización se contactó con el acusado Víctor Gutiérrez Londoño, apodado “Parce” o “Colombiano”, con quien acordó dicho propósito delictivo a cambio de promesa remuneratoria consistente en el pago de una suma de dinero, proveyéndole Renato López a Gutiérrez de la información necesaria para cumplir dicho fin, consistente en una nota manuscrita, de puño y letra de López, que contenía la dirección del señor Correa.

El acusado Gutiérrez, una vez recibida la información necesaria para dar muerte a la víctima, realizó acciones directas tendientes a asegurar la comisión del homicidio, entre otras, contar con un chofer que lo trasladara hasta el domicilio de Alejandro Correa. Para éste último objetivo, Gutiérrez Londoño contactó al acusado Claudio Riveros Canales, quien, según lo acordado con Gutiérrez, condujo un vehículo y trasladó el día 17 de Mayo de

2020 a Gutiérrez y a la acusada Melissa Palma Valdés, vinculada sentimentalmente con este último, y quien tenía total conocimiento del propósito delictivo en curso, hasta el frontis del domicilio del señor Correa, ubicado en Avenida Bosques de Montemar N° 1295, Concón, de acuerdo a la información aportada en la nota escrita por Renato López. Parte del trayecto fue grabado en video por la acusada Melissa Palma con su teléfono celular, realizando de esta forma labores de vigilancia y reconocimiento del lugar para facilitar la comisión del crimen. Al día siguiente, 18 de Mayo de 2020, en horas de la mañana, el acusado Claudio Riveros Canales, en conocimiento del propósito delictivo que Víctor Gutiérrez materializaría, lo condujo y trasladó en el vehículo marca "Toyota", modelo "Yaris", de color negro, placa patente BXFJ.13 hasta el domicilio del señor Correa, al cual llegaron aproximadamente a las 8:15 horas, bajándose Gutiérrez, llevando consigo un arma de fuego. Allí, solicitó hablar con Alejandro Correa y, ante la negativa de la víctima de atenderlo, Gutiérrez se retiró junto con Claudio Riveros en el mismo vehículo, regresando al referido domicilio alrededor de las 9:40 horas con la finalidad de consumar su propósito. En esta segunda oportunidad, Víctor Gutiérrez encontró a la víctima en el exterior de su domicilio en compañía de Claudio Muzio Saldes, momento en que se les aproximó y, con intención homicida, a corta distancia y utilizando un revólver marca "Arminius", calibre .38 milímetros especial, serie N° 1511944, le disparó directamente a Alejandro Correa, impactando uno de los proyectiles en su cabeza, quien falleció como consecuencia de laceraciones cerebrales, causadas por ojiva de proyectil de arma de fuego, según evaluación y diagnóstico del Servicio Médico Legal de Valparaíso.

El acusado Víctor Gutiérrez no contaba con permiso legal alguno para el transporte, porte y tenencia del arma antes individualizada, la que había sido sustraída a su propietario Antonio Aquiles Espinoza -quien realizó la denuncia y encargo respectivos-, sabiendo o no pudiendo menos que saber que ésta era producto de un ilícito.

Con similar intención homicida, el acusado Gutiérrez disparó a Claudio Muzio, sin lograr herirlo, para luego huir del lugar y abordar nuevamente el mismo vehículo conducido por Claudio Riveros, quien lo aguardaba en las inmediaciones, conservando éste último en su poder el arma de fuego utilizada para la comisión del ilícito, y para cuyo transporte, tenencia y porte



tampoco contaba con permiso legal alguno, y que le fue sustraída a su propietario Antonio Aquiles Espinoza, sabiendo o no pudiendo menos que saber que ésta era producto de un ilícito.

Por el homicidio del señor Correa, Renato López pagó a Víctor Gutiérrez una suma de dinero previamente acordada.

Todos los acusados, López, Gutiérrez, Riveros y Palma, fueron detenidos por la Brigada de Homicidios de la PDI a partir de sendas órdenes judiciales emanadas del Juzgado de Garantía de Viña del Mar". (Sic).

20°) Que el tribunal, en el considerando vigésimo primero del fallo, efectúa el análisis y valoración de la prueba que lo condujo al establecimiento de los hechos ya referidos, y en lo que concierne al acusado Renato López Fuentes, en la letra d), señala: "**d)** Ahora bien, atendidas las especiales circunstancias que rodearon la perpetración del crimen, y sin perjuicio de la acreditación material del hecho punible que se tuvo por probado en la forma desarrollada precedentemente, resulta preciso señalar de manera somera en este acápite, que una vez consumado el homicidio, al tratarse de una acción tan repentina, feroz y directa para dar muerte a don Alejandro, se descartó por parte de la policía que el autor de los disparos tuviera como finalidad sustraer especies de valor que portara la víctima o su acompañante, encaminando así sus pesquisas a abordar la posibilidad de encontrarnos frente a un crimen por encargo, hipótesis que se confirmaba con las declaraciones de los testigos, y muy especialmente, por el contenido de los audios e interceptaciones telefónicas obtenidos de los aparatos móviles de los acusados que los detectives sometieron a análisis, en que el propio Gutiérrez hacía mención al pago que recibiría por cometerlo. Acto seguido, la policía se avocó a rastrear e identificar a terceros, que, sin estar físicamente en ese lugar, tuvieran un móvil potencial que los hubiera determinado a asesinar a Alejandro Correa, dando así con la identidad del mandante, quien, en el caso que nos convoca, al contactar al sicario, desencadena la perpetración del delito, subrogándose en la persona del disparador, desde el momento que lo induce directamente a ejecutarlo, de modo que, en forma ficticia, él mismo también ejecuta el acometimiento que puso término a la vida del empresario" (Sic).

21°) Que tal como ocurrió con el recurso deducido por la defensa de Melissa Fernanda Palma Valdés, en el presente arbitrio tampoco se especifican las reglas o principios de la lógica formal que habrían sido conculcados y de qué

manera; lo mismo que ocurre con las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Así, no es posible efectuar análisis alguno a su respecto.

22°) Que de cualquier manera y tal como se indicó en el considerando sexto que antecede, la sentencia cumple con las exigencias del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, puesto que de la sola lectura de su motivación vigésimo primera, aparece que contiene una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados, y se hace la valoración de los medios de prueba que fundamentan sus conclusiones, sin incurrir en contradicción alguna con los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, cumpliendo así con todas las exigencias del artículo 297 del mismo texto legal y permitiendo reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega, todo lo cual conduce a desestimar, tanto la principal causal de nulidad alegada como la primera causal que fuera deducida en forma subsidiaria.

23°) Que por último, el recurrente invoca como segunda causal subsidiaria de nulidad, la del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. Manifiesta que Renato López fue condenado como autor del delito de homicidio calificado, bajo la figura del artículo 15 N° 2 del Código Penal, al considerar el tribunal que cae en el caso de los que inducen directamente a la comisión del delito, por ser instigador del mismo, usando las calificantes segunda y quinta del artículo 391 del Código Penal. Agrega que respecto de la calificante segunda, esto es, actuar por premio o promesa remuneratoria, parte importante de la doctrina ha entendido que la redacción de la norma hace que solo pueda aplicarse al autor ejecutor, comúnmente llamado sicario, sin que su alcance llegue al instigador, pero –dice-, no es la única razón que lo lleva a disentir de tal calificación, ya que en este caso el premio o promesa remuneratoria es inherente al delito y sin él no puede cometerse, de modo que lo que ha hecho el tribunal es valorar dos veces la misma conducta, primero para fundar la responsabilidad y luego para agravar la pena. Expresa que algo parecido ocurre con la circunstancia quinta, esto es, la actuación con premeditación conocida, por ser inherente a la instigación. Afirma que se trata de una infracción al principio non bis in ídem, expresamente establecido en el inciso segundo del artículo 63 del Código Penal, que establece que no producen el efecto de aumentar la pena, aquellas agravantes de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no puede cometerse;



añade que si bien la norma habla de circunstancias agravantes, atendida la naturaleza del tema que nos ocupa, claramente se aplica a las calificantes del artículo 391. Asegura que su representado debió ser condenado como autor del delito de homicidio simple.

24°) Que el tribunal, en el considerando vigésimo segundo de la sentencia, califica los hechos que tuvo por acreditados –transcritos en el fundamento decimonoveno que antecede-, en relación con el condenado Renato López Fuentes, como constitutivos de la comisión del delito de homicidio calificado, en grado de consumado, en la persona de Alejandro Correa Correa, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal en relación con la circunstancia segunda (por premio o promesa remuneratoria) y la circunstancia quinta (con premeditación conocida).

25°) Que, enseguida, en los considerandos vigésimo cuarto y vigésimo quinto, los sentenciadores razonan, al respecto, de la siguiente manera:

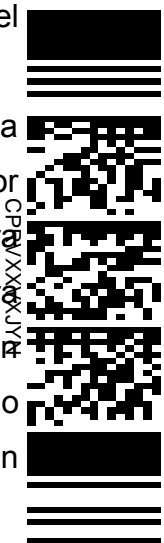
“VIGÉSIMO CUARTO: En relación al homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal, además, debe concurrir alguna de las circunstancias que allí se enumeran.

En este caso, según se informó en el veredicto, los hechos que se dieron por probados importan para el Tribunal la comisión del delito de homicidio calificado en relación con la circunstancia segunda (por premio o promesa remuneratoria) y la circunstancia quinta (con premeditación conocida).

Circunstancia de premio o promesa remuneratoria.

En cuanto a la calificante de premio o promesa remuneratoria, a juicio del tribunal, esta supone necesariamente la intervención, además del hechor y de la víctima, de un tercero, específicamente la persona del mandante, que es quien ofrece el pago a cambio de la comisión del crimen, de modo que la existencia del premio o promesa, alcanza a los dos co partícipes.

En efecto, se trata de una calificante que abarca, tanto al que induce a matar como al inducido, teniendo presente en este punto, la opinión del profesor Garrido Montt, quien señala: “como el homicidio calificado es una figura independiente, conforme al sistema de participación reglado en nuestra legislación, el autor instigador está induciendo al mercenario, a cometer un homicidio calificado y no un homicidio simple, por lo tanto responde del mismo delito, porque ha intervenido subjetiva y objetivamente en ese tipo penal y no en otro”.



Despejado lo anterior, ha de acreditarse que efectivamente existió un vínculo causal directo entre, el premio o promesa ofrecido -de naturaleza económica-, y la muerte de la víctima, de manera que, para acreditar esta circunstancia, en palabras del profesor Mario Garrido: “el inductor debe pagar o prometer el precio para que se mate y el que realiza la acción hacerlo precisamente para recibirlo”.

1.- En este orden de ideas, según se acreditó en el juicio, luego de perpetrado el crimen, a partir de las declaraciones de los testigos presenciales, e información de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar, fue posible establecer quienes, el día de los hechos, se trasladaban al interior del taxi colectivo marca “Toyota”, modelo “Yaris”, de color negro, placa patente BXFJ.13 desde el cual descendió el autor de los disparos que provocaron la muerte del señor Correa.

Así, y sin perjuicio de los razonamientos que se desarrollarán en extenso más adelante, referidos a la participación criminal propiamente tal, resultó probado que alrededor de las 9:40 de la mañana del 18 de mayo del 2020, Víctor Gutiérrez llegó hasta el domicilio ubicado en avenida Bosques de Montemar 1295, y se encontró a la víctima, Alejandro Correa, en la vereda, afuera de su casa en compañía de Claudio Muzio Saldes, momento en que se les aproximó y le disparó directamente a Alejandro Correa en su cabeza, quien falleció como consecuencia de laceraciones cerebrales, causadas por ojiva de proyectil de arma de fuego.

Cabe recordar que, según manifestó el señor Muzio, en ese momento él solo vio a una persona que disparó, no lo escuchó hablar, nunca les dijo nada ni a Alejandro ni a él y mantuvo la misma ubicación para efectuar los tres disparos, primero a Alejandro, para a continuación girar y apuntarlo a él.

2.- A continuación, establecida dicha acción homicida, cabe preguntarse: ¿Por qué llega Víctor Gutiérrez, aquel 18 de mayo a ultimar a la víctima?, ¿qué razones pudo tener para acercarse, y sin mediar ningún tipo de provocación de su parte dispararle en dos oportunidades, -una de ellas directo a su cabeza- a frente de su propio hogar? ¿cómo explicar un ataque tan cruel y directo dirigido a poner término a la vida de un tercero?

Estas mismas interrogantes fueron las que expuso ante el Tribunal Valentina Correa, hija de don Alejandro, quien declaró, que luego de enterarse de lo sucedido, “lo primero que pensó es que no se trataba de un asalto, ya que era



día lunes en la mañana”, así que su cabeza “se conectó” a las últimas conversaciones que tuvo con su papá por una toma de terrenos que comenzó las primeras semanas de mayo, y sabía “que el conflicto estaba con los terrenos de Quilpué”, razón por la que comenzó a reunir antecedentes a través de su correo y con personas cercanas a su padre que le pudieran “entregar luces” para comprender lo que había pasado, luego de lo cual, después de revisar todos los documentos, conversaciones, audios y videos que pudo recopilar, llegó a la conclusión –e informó a la policía- que el único conflicto que tenía su padre el momento de ser asesinado era con el representante legal de la empresa “Rellenos controlados”, Renato López Fuentes.

En efecto, según se probó en el juicio, mediante la incorporación de la prueba documental N° 7 ofrecida en el auto de apertura, consistente en copia de la Causa Rol C -2125 -2019 del 1er. Juzgado Civil de Quilpué, caratulado “Correa / Rellenos Controlados R y A SPA”, en el mes de Septiembre del año 2019, la víctima, Alejandro Correa Correa, presentó ante dicho tribunal una demanda de comodato precario contra el acusado López Fuentes, representante legal de la sociedad “Rellenos Controlados R Y A SPA”, dado que éste habría ocupado terrenos de su propiedad, ubicados en dicha comuna. Cabe hacer presente que la existencia de este litigio, no fue controvertida por las partes, confirmando así las aseveraciones de los testigos sobre este punto.

Estas sospechas por parte de la familia del señor Correa, acerca del real móvil del crimen, con el paso de las horas, van cobrando sentido al tenor de la declaración que ese mismo día prestó ante la policía el señor Claudio Muzio, quien detalló, que en el momento del ataque, escuchó cuando Alejandro repentinamente gritó: “tranquilo, para, para”, se giró a mirar y vio a una persona parada donde termina la vereda y comienza la calle, frente al portón, que apuntaba a Alejandro con una pistola y percutió dos disparos en su contra, luego de lo cual, su amigo cayó en el lugar, y el sujeto luego se dirige y le dispara a él.

Esta parte de su testimonio, resulta reveladora para la policía, en tanto da cuenta de una agresión homicida brutal, y especialmente repentina, sorpresiva y artera, sin mediar provocación alguna que la justifique, y que por cierto no tuvo como fin la sustracción de ningún objeto de valor que la víctima portara en ese momento, ni tampoco su acompañante, de manera que, descartando el robo como objetivo del asesinato, inmediatamente encaminan sus diligencias hacia



otras líneas investigativas que permitieran asentar un móvil para la perpetración de un homicidio de esas características.

3.-De manera simultánea, la policía llevaba adelante múltiples pesquisas en el sitio del suceso, lo que, como ya se dijo, les permitió determinar en un lapso muy breve la identidad del chofer del vehículo en que se trasladaba el disparador, llegando así a tomar declaración en horas de la noche de aquel mismo día al co acusado Claudio Riveros Canales, y más tarde al testigo Jairo Cortes Córdova, quien resultó ser una pieza clave al momento de dilucidar la participación de un autor inductor que, a cambio del pago de una suma de dinero, encargó al primero la perpetración del crimen.

Así, al entrevistarse los funcionarios de la Brigada de Homicidios con Claudio Riveros, según narró Rodrigo López, este, de forma voluntaria les entregó información conducente a individualizar al autor ejecutor de los disparos, y junto con ello, aportó también los datos de terceros, cercanos a Gutiérrez que pudieran entregar información que permitiera dar con su paradero y concretar su detención, contexto en el cual, los funcionarios de la policía de Investigaciones tomaron contacto con el testigo Jairo Cortés, quien le arrendaba una pieza a Víctor Gutiérrez, y que al prestar declaración les contó que el “Parce” -como apodaban a Víctor Gutiérrez-, le comentó “que le habían encargado una misión”, y que consistía en “pitearse a un weon de Con Con”.

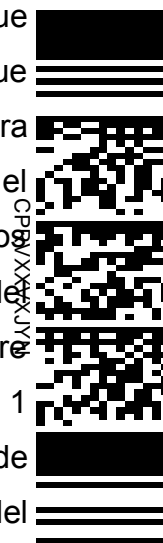
Luego, inquirido Jairo Cortés específicamente en relación al elemento de premio o promesa remuneratoria que se viene analizando, y posible identidad del mandante, señaló que según le contó el propio Gutiérrez, un conocido, “le había presentado a un sujeto de nombre Renato, quien le ofreció pagarle \$5.000.000.- millones de pesos para matar a una persona en Con Con”. A continuación, en la misma declaración, en relación al acuerdo propiamente tal, Jairo señaló que el mismo domino 17 de mayo, “cuando estábamos tomando once en mi casa, el Parce comentó en la mesa que habían ido a averiguar la casa de la persona que tenía que matar, según lo acordado con el sujeto de nombre Renato”, mismo nombre de pila que en su momento entregó Melissa Palma, al referirse al jefe de su pareja, quien por “el trabajo” que había realizado ese 18 de mayo le había pagado \$5.000.000.- (cinco millones) de pesos.

4.- Luego, siguiendo una sucesión cronológica de la información recabada por la policía, cobra medular importancia en este punto, el análisis de los datos extraídos desde el celular de Melissa Palma, informado por el Comisario López,

mayo, fue junto a Víctor Gutiérrez y Claudio Riveros hasta Bosques de Montemar, y vio que Gutiérrez llevaba “un papelito” que decía Alejandro Correa y la dirección: “Bosques de Montemar”, y que al día siguiente, 18 de mayo del 2020, en horas de la tarde, Gutiérrez llegó con muchos billetes de \$20.000.- mil pesos, cerca de \$2.500.000.- (dos millones quinientos mil) pesos aproximadamente, y que ella se tomó fotografías con esos billetes y con el revólver que portaba el acusado. Estas imágenes, efectivamente fueron halladas por personal policial al efectuar el análisis de su teléfono, manifestando el comisario Correa que en las fotografías N° 1, N° 2, N° 4, N° 5 y N° 6 del set N° 25 de otros medios de prueba se ve el teléfono de Melissa Palma y su imagen con fajos de billetes de \$20.000.- (veinte) mil pesos, y la imagen N° 3 muestra la totalidad de los billetes de \$20.000.- (veinte) mil pesos: se hizo un ejercicio tratando de saber la cantidad exacta de dinero que había en la imagen, y alcanzaba cerca de \$3.000.000.- (tres) millones de pesos, y al centro se ve la mano de una mujer, con la misma coloración de uñas que se apreciaba en la imagen N° 3.

Estas imágenes, confirman la revelación de Melissa, en cuanto a que vio a su pareja, Víctor, el mismo día de los hechos, luego de consumado el homicidio, con una importante cantidad de dinero en efectivo, (cercana a los \$3.000.000.- millones de pesos) suma ciertamente poco habitual en relación a las transacciones de retiro de billetes permitidas en los cajeros automáticos de nuestro país, y que por lo tanto, solo podrían venir del pago que recibió, por parte del mandante, luego de confirmado el fallecimiento del señor Correa.

En este punto, el comisario López declaró que no se observó en ningún momento tráfico de llamados entre los teléfonos de Víctor Gutiérrez y Renato López, -según da cuenta lamina N° 11 del set de imágenes N° 60 que le fue exhibido al perito Arenas- pero sí se utilizaron las antenas telefónicas que utilizaban sus aparatos móviles, es decir, se hizo una imagen para georreferenciar los teléfonos de Gutiérrez y López, y se pudo establecer que el día 18 de mayo del 2020, entre las 15:30 y 16:00 horas, ambos aparatos telefónicos estaban en las inmediaciones del sporting de la comuna de Viña del Mar, lo que a su juicio sería una prueba del encuentro que se produjo entre ambos para la materialización del pago convenido. Así, respecto a la imagen N° 1 de otros medios de prueba N° 48, identificó avenida Uno norte y los números de teléfono de los acusados involucrados, que permite establecer que en la tarde del



18 de mayo, el teléfono que usaba Gutiérrez se encontraba en las inmediaciones del sporting, en tanto el aparato móvil de López Fuentes ese mismo día, a las 15:39 también hizo conexión con la antena ubicada en el lugar. Luego, las fotografías N° 29 y N° 30 del set N° 69 de otros medios de prueba, también acreditan que ese día 18 de mayo del 2020, en ese bloque horario Gutiérrez estaba en la comuna de Viña del Mar.

Esta conclusión del oficial López Contreras, surge de la pericia evacuada por el Subprefecto de la Policía de Investigaciones Marcelo Arenas Tapia, quien informó que con fecha 21 de enero de 2020 se le encomendó, por la fiscalía de Viña del Mar, hacer un análisis con respecto a distintas Sim Cards para georreferenciarlas, de los teléfonos de Alejandro Correa Correa, Renato López, Claudio Riveros, Víctor Gutiérrez y Melisa Palma, en base a ello se generó el resumen de conexiones, donde se logró efectuar un análisis de pruebas de Sim Cards que se georreferenciaron en el Sporting Club, y otras distancias que existieron entre el lugar a los diversos domicilios de los involucrados.

El fiscal exhibió al perito otros medios de prueba N°60, y en la lámina N°1 identificó la primera recolección de información que se hizo de carga masiva de datos, los llamados telefónicos. Se analizó y se interpretó el número 989211263, el cual estaba registrado a nombre de Alejandro Correa Correa; número 941876176, registrado a nombre de Renato Antonio López Fuentes; Sim Card 974648988, registrada a nombre de Melisa Palma Valdés; Sim Card 979589582 que estaba registrada a nombre de Víctor Gutiérrez Londoño y Sim Card 961052494 a nombre de Claudio Riveros Canales, obteniéndose su latitud y longitud en coordenadas del tráfico de voz y tráfico de datos. La latitud y longitud se refiere a todas las georreferenciaciones que corresponden a conexiones que se realizaron, esto es, las llamadas de entradas o salida, cada una de las Sim Card sometidas a investigación se conectaron con antenas de radio base, las cuales se denominan CELL IT, de esta forma, cada vez que se generó un tráfico se hizo con latitud y longitud de cada una de las Sim Card, por lo que no hay manera de señalar que la llamada no se hizo.

Esta operación de análisis y extracción de datos, está contenida de manera detallada y fue explicada en juicio en relación a las láminas N° 2 a la 152 que le fueron exhibidas, destacando, en relación a la calificante que se viene analizando, la lámina N° 2 en que se georreferencian las radios base, de la entrada hacia el Sporting Club por calle Los Castaños, con latitud -33.0180481 y



con longitud de -71.7402402, de la segunda entrada por calle Sporting, con la coordenada latitud -33.0254697 y con una longitud de -71.5322597 y de la entrada calle uno norte al Sporting, con latitud -33.0259724 y una longitud de -71.5387426.

Explicó el perito que en este trabajo, él no analizó las conversaciones, sino que se limitó a establecer la georreferenciación de la antena base, que conecta con la Sim Card por tráfico de voz o de datos, ya que si se marca, se conteste o no, se registra igual la llamada, estas georreferenciaciones se hacen respecto a una antena determinada que puede estar hasta un kilómetro a la redonda, más o menos, de la cual se fija la latitud y longitud de las coordenadas donde está instalada, de acuerdo a distancias aproximadas extraídas de Google Maps.

Aquí, el oficial de caso le solicitó un análisis respecto de puntos específicos situados en el Sporting, que en su pericia se fijaron con las letras, A, B y C, con estas tres celdas para geoposicionamiento, se determinan las tres entradas respecto a las antenas utilizadas para análisis de Sim Card, luego, una vez analizados los tráficos telefónicos, se procede a posicionar las tres coordenadas de longitud y latitud para establecer si los teléfonos se conectan con las antenas de radios base del sector y ver las distancias en que se encuentran las Sim Cards sometidas a investigación, lo que le permitió determinar la georreferenciación de los teléfonos móviles correspondientes a López y Gutiérrez, y que entre las 15:30 y 16:00 horas del 18 de mayo del 2020, ambos aparatos hicieron conexión con la antena ubicada al interior del sporting, y que significa que en ese instante las Sim Card de ambos se encontraban a menos de un kilómetro de distancia. Esta información, referida a la latitud y longitud asociadas a radios bases de las SIMCARD de los N°s 979589582 y 989211263 fue obtenida desde la oficina de Seguridad Operacional de la Empresa ENTEL, según da cuenta documento N° 61 aportado por el fiscal.

Cabe señalar que el propio Arenas manifestó reiteradamente durante su exposición que él sólo aplicó la metodología de análisis telefónico de georreferenciación, que se trabaja sobre distancias en relación a las antenas base, y que “puede abarcar 100, 200, un km, o 10 km a la redonda”, en tanto el geo posicionamiento es cuando se fija a alguien en un lugar específico, a un metro a la redonda, referido derechamente a la ubicación de la Sim Card, y no al lugar en que se encuentra la antena base con la que el móvil se conectó, en consecuencia, no resulta posible para al Tribunal dar por establecida de manera



inequívoca la ocurrencia de un encuentro para el pago entre los acusados López y Gutiérrez en dicho lugar -atendidas las características y limitaciones del estudio de georreferenciación que se viene analizando-, sin embargo, la cercanía que se produjo entre las conexiones de las Sim Card de ambos teléfonos celulares, vinculada con la declaración de Melissa, quien vio llegar después del homicidio a Víctor Gutiérrez casi \$3.000.000.- millones de pesos en su poder, permite ciertamente inferir al oficial a cargo del caso, que, ya fallecido don Alejandro Correa, estos billetes provenían del pago que efectuó Renato López al sicario, y que esta operación se pudo haber materializado en las inmediaciones del sporting de Viña del Mar en aquel instante en que ambos móviles se encontraban conectados a las antenas base ubicadas en dicho lugar.

6.- Seguidamente, luego de practicada la detención de Víctor Gutiérrez, es que los funcionarios policiales lograron extraer desde su teléfono celular, -el cual Rodrigo López identificó al serle exhibida la evidencia material signada con el N° 9- una imagen con la fotografía de Alejandro Correa Correa, además de la imagen de un papel manuscrito en que se detallaba la dirección de la víctima, -identificadas por el testigo en las fotografías N° 16 y 17 del set de imágenes N° 69- cuya autoría, luego de las respectivas pruebas a las que se sometió, -realizadas e informadas al Tribunal por la perito documental caligráfica doña Ana María Anguiz-, fue atribuida de modo directo e inequívoco al co acusado Renato López Fuentes, y que, ciertamente, en el contexto de la prueba que se viene analizando, permitió concluir, más allá de toda duda razonable, que se trataba de las indicaciones que López entregó al sicario con el fin de proveerlo de los datos necesarios para ejecutar el crimen.

7.- A mayor abundamiento, las conclusiones vertidas en este punto, relativas al acuerdo pactado para cometer el homicidio a cambio de un pago de dinero, y relación que esto generó entre los acusados López y Gutiérrez, fueron ratificadas mediante la diligencia de registro practicada el día 18 de agosto del 2020 a la celda de Víctor Gutiérrez Londoño, lugar desde donde se incautó un listado de especies que el sicario pidió desde el interior de la cárcel, reconocido por el oficial López en el documento N°1 de la prueba documental N° 48 requerimientos que, según se acreditó durante la investigación, le fueron proveídos diligentemente tanto por la pareja de Renato, Yosanka, como por terceros de su círculo íntimo, específicamente su suegra y secretaria, evidenciando así el interés de López Fuentes por proporcionar al sicario una



condición de bienestar al interior del complejo que lo disuadiera de revelar la existencia del mortal acuerdo celebrado entre ambos.

En este mismo orden de ideas, la fotografía N° 5 del mismo set N° 48 muestra una declaración jurada de 23 de julio del 2020, en que comparece Silvio Roberto Romero Catrinao, quien declara ser dueño de un televisor LCD LED marca Hisense, y en tal calidad autoriza para que sea entregado para su uso personal a Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño. A continuación, de uno de los teléfonos que tenía Gutiérrez en su celda se extrajeron videos de las noticias captadas por el aparato hacia un televisor, y que decían relación con la cobertura periodística que hacían los noticiarios respecto de la detención de Renato López Fuentes, de este modo, las fotografías N° 6, N° 7 y N° 8 del set de fotografías ofrecidas como otros medios de prueba N° 77 –de acuerdo al testimonio del gendarme Ariel Morales- muestran al propio Víctor Gutiérrez Londoño en su celda, y de fondo un televisor, y ya en las fotografías N° 9 y N° 10 se ve un pantallazo de los videos que había en el celular, -exhibidos en juicio y numerados con los N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 del set 48- referidos en un canal de televisión a la detención del “presunto autor intelectual de asesinato de empresario”, y en otro, al “hombre que había contratado a sicario de Con Con”, contenido que ciertamente acredita que por su parte, el sicario también estaba preocupado por la detención del mandante del homicidio, atento al momento de su detención e informaciones relativas al proceso que se llevaba en su contra.

8.- De este modo, resultó probado que, motivado por los conflictos judiciales a los que se había visto enfrentado con el señor Alejandro Correa, y que ciertamente entorpecían los proyectos que López pretendía desarrollar en los terrenos de la empresa “Rellenos controlados” ubicados en la comuna de Quilpué, es que Renato López Fuentes contactó a Víctor Gutiérrez Londoño, encomendándole asesinar a don Alejandro Correa, encargo para cuya ejecución lo proveyó de los datos de la víctima, y por el cual le pagaría una cierta suma de dinero una vez consumado el abyecto plan.

Este contacto, este acercamiento de Renato López hacia Víctor Gutiérrez con el fin de encargarle matar al señor Correa, se ha acreditado en el juicio mediante un ejercicio de inferencia lógica deductiva, a partir del cual, luego del análisis de las pruebas aportadas, que se erigen en indicios o premisas probadas materialmente, es posible seguir una secuencia de pasos lógicos, y arribar

CPRXXXKJ44

finalmente a una conclusión que acredita indefectiblemente su participación en este delito.

En efecto, si bien desconocemos los términos, fecha, forma y lugar en que se produjo el contacto entre ambos, sí sabemos que Alejandro Correa representaba un obstáculo para los intereses económicos de López, estorbo que este decidió eliminar poniendo término a su vida, misión que le fue confiada al sicario Gutiérrez Londoño, y para cuyo éxito el primero lo proveyó tanto de una foto de su rostro, como de la dirección exacta a la que debía dirigirse para ultimarle, todo lo anterior, a cambio del pago de una suma de dinero, retribución que el propio Gutiérrez mencionó en más de una oportunidad en los audios aportados en el juicio, y al que igualmente se refirieron los testigos Jairo Cortés y Melissa Palma en sus respectivas declaraciones, acreditando así, la concurrencia de la calificante referida al premio o promesa remuneratoria, al haberse probado, más allá de toda duda razonable, la existencia de un acuerdo, entre el instigador y el instigado, en virtud del cual, el primero ofreció el pago de una cierta cantidad de dinero, a cambio del asesinato de don Alejandro Correa, oferta que ciertamente Víctor Gutiérrez aceptó y consumó al poner término a su vida en la mañana del lunes 18 de mayo del 2020, confirmando finalmente la relación de causalidad que existió entre el pago y la ejecución del crimen.

VIGESIMO QUINTO: Circunstancia de premeditación conocida. Que, tal como se indicó en el acta de veredicto, también se tuvo por justificada, la circunstancia de haber obrado los autores López y Gutiérrez con premeditación como calificante del delito de homicidio, previsto en el artículo 391 N°1, circunstancia quinta, del Código penal.

La dogmática y la jurisprudencia nacionales, están contestes en que la premeditación, está ligada con el concepto de una determinación anterior al momento mismo de la muerte, no solo referida a la voluntad de delinquir, subyacente en la comisión de cualquier delito, sino que en este caso, “es preciso que haya existido la determinación de realizarla con anterioridad a la comisión misma del acto, aunque sea en un momento brevísimo”. Lo que significa, que, de acuerdo a un criterio estrictamente cronológico, debe transcurrir un intervalo de tiempo, más o menos extenso, entre que se adopta la decisión de delinquir y la comisión del ilícito.

Ahora bien, conforme continúa su análisis el Profesor Etcheberry, “El solo transcurso del tiempo indica la presencia de deliberación, pero no de



premeditación, si no ha concurrido además el estado de ánimo tranquilo. Este es el llamado criterio psicológico de la premeditación”. Cabe hacer presente en este punto, que al hablar de un ánimo frío y tranquilo, no nos referimos necesariamente a aquel temperamento de suyo conciliador, calmado, o que evade los conflictos, sino al cálculo que la persona efectúa, y que sin duda repercute en la dificultad de la víctima para defenderse contra quien planeó la agresión.

En este caso concreto, fue posible acreditar, como ya se dijo, que indiscutiblemente hubo un acercamiento previo entre Renato López y Víctor Gutiérrez, momento en el cual, el primero encargó al segundo dar muerte a don Alejandro Correa a cambio de una cierta cantidad de dinero.

A partir de este momento, ambos acusados adhieren a un dolo homicida común, el cual requiere, de acuerdo a los roles en los que cada uno participó, de diversas acciones encaminadas a consumir con éxito el delito, todas las cuales, se enmarcan tanto en el criterio cronológico como en el criterio psicológico requerido para tener por configurada a su respecto la premeditación.

1.-Así, en el caso de Renato López, él fue quien ideó el plan con el fin de asesinar a Correa Correa, para cuya puesta en marcha, primero que todo contactó a Víctor Gutiérrez, a quien ofreció una suma de dinero a cambio de la perpetración material del delito. Sin embargo, este pacto previo entre ambos, naturalmente exigía que López proveyera a Gutiérrez de una exacta singularización de la víctima, así como de los datos requeridos para ubicar a Correa y proceder a darle muerte, labor que, según se probó en el juicio, se vio materializada en la información extraída desde el teléfono celular de Víctor Gutiérrez luego de su detención.

Es así, como, según informó en juicio el comisario Rodrigo López, en el momento que se practicó la detención de Víctor Gutiérrez, se le informó inmediatamente que había una orden de detención en su contra, procediendo además a incautar su teléfono, y la suma de \$480.000.- (cuatrocientos ochenta) mil pesos en dinero en efectivo que mantenía en su poder, especies que identificó al serle exhibida evidencia signada con el N° 9 de otros medios de prueba, que corresponde a la NUE 6131147: un teléfono celular marca Samsung levantado desde el dormitorio del inmueble ubicado en pasaje Bulnes 2039, Quilpué, y en la imagen N° 1 de otros medios de prueba N° 42, NUE 6131140 que corresponde al dinero ya señalado.



A continuación, explicó el testigo que este celular, fue analizado por la brigada de ciber crimen de la policía de Investigaciones, lo que permitió obtener una imagen con la fotografía de Alejandro Correa Correa, junto con una imagen de un papel cuadriculado tipo cuaderno de la universidad Andrés Bello, la que señalaba a mano alzada en tinta azul el nombre y la dirección del señor Correa: “avenida Bosques de Montemar 1295 Con Con”. Destaca en este punto, que, al serle exhibida la fotografía N° 16 del set de imágenes N° 69 ofrecido en el auto de apertura como otros medios de prueba, el testigo señaló que se trata de un archivo creado el 2 de mayo del 2020, que muestra el rostro de Alejandro Correa Correa, en tanto la fotografía N° 17 se trata de un archivo creado el 3 de mayo del 2020 a las 8:45, con el nombre y dirección del empresario, información que, en relación al elemento de premeditación que se viene analizando, nos permite aseverar, que la labor de entrega de datos aportados por el mandante, se produjo los días 2 y 3 de mayo del 2020, es decir, al menos dos semanas antes de la comisión del delito.

Confirmó la operación de extracción de datos, el profesional encargado de efectuar la pericia, señor Luis Carrasco Valladares, quien expuso que en virtud de oficio N°32 de la Brigada de Homicidio de Valparaíso, de fecha 01 de junio de 2020, se le remitieron cuatro dispositivos móviles con sus cadenas de custodia a objeto de efectuar una extracción de la información de cada uno de ellos. En lo pertinente, dio cuenta del Informe N°30- 2020, de fecha 19 de junio de 2020, en el que se describe el análisis realizado a la especie NUE 6131147, que corresponde a un teléfono Samsung, modelo SM-J260M, y una tarjeta microSD, marca Kensington, de 16GB, indicó que, a este teléfono, mediante la aplicación del sistema UFE, se le hizo una extracción lógica avanzada, luego una física a la tarjeta microSD y una extracción manual a las conversaciones de WhatsApp, y esto fue respaldado en un disco compacto, cadena NUE 5979412. Se le exhibió a continuación, evidencia signada como otros medios de prueba N°9, identificando la cadena NUE 6131147, teléfono marca Samsung, recibido el 08 de junio y entregado el 22 de junio de 2020, también se le exhibió otros medios de prueba N°68, identificando la cadena NUE 5979412, correspondiente a dos discos compactos de respaldo levantados el día 19 de junio y entregados el 22 de junio de 2020.

Así, en relación al elemento de premeditación que se viene analizando, tanto desde el punto de vista cronológico como psicológico, es posible señalar



que, existiendo un móvil económico -derivado del entorpecimiento que le ocasionaba el conflicto de deslindes por los terrenos que ambos tenían en la comuna de Quilpué-, es que Renato López primero que todo tomó la decisión de dar muerte a Alejandro Correa.

Luego de adoptar el criminal propósito, contactó a un tercero, individualizado como Víctor Gutiérrez Londoño con el fin de que este, materialmente perpetrara el crimen, operando, al tenor de la modalidad de autoría del artículo 15 N° 2 del Código Penal, una especie de subrogación del segundo respecto del primero, en tanto López resuelve cometer un crimen, pero induce a otro a ejecutarlo.

Posteriormente, Renato López suministra a Gutiérrez los datos consistentes en el rostro y dirección de Alejandro Correa, y que le permitirían reconocer a su víctima al momento de ultimarla, como efectivamente sucedió, todos antecedentes que dan cuenta de un disvalor mayor recogido por la calificante que se viene analizando, referido a la persistencia en el tiempo del propósito delictivo y la elaboración de un plan para cometerlo, -que involucró a un tercero- y que culmina con el trágico desenlace ya conocido.

2.- Por otra parte, en relación a la circunstancia de haber obrado Víctor Gutiérrez Londoño con premeditación como calificante del delito de homicidio en la persona de Alejandro Correa, desde ya es del caso recordar el acercamiento que se produjo entre López y Gutiérrez, momento en el cual, el primero encargó al segundo, a cambio del pago de una suma de dinero, dar muerte a don Alejandro Correa Correa.

Al aceptar el encargo, Víctor Gutiérrez adhiere al propósito delictivo del mandante, y ambos se embarcan en un plan común, sostenido en el tiempo, y cuyo clímax se concreta aquel aciago 18 de mayo de 2020, al perpetrar Gutiérrez el asesinato de la víctima.

Durante este tiempo, el sicario recibió tanto la dirección, como una imagen del rostro de don Alejandro, datos fundamentales para individualizar a aquel contra quien dirigiría su acción homicida.

A continuación, tal como se acreditó en el juicio, el acusado Gutiérrez realizó acciones directas tendientes a asegurar la comisión del homicidio, entre otras, contar con un chofer que lo trasladara hasta el domicilio de Alejandro Correa. Para éste último objetivo, contactó al acusado Claudio Riveros Canales, quien, según lo acordado con Gutiérrez, condujo un vehículo y trasladó el día 17



de Mayo de 2020 a Gutiérrez y su pareja, hasta el frontis del domicilio del señor Correa, ubicado en Avenida Bosques de Montemar N° 1295, Concón, realizando de esta forma labores de vigilancia y reconocimiento del lugar para facilitar la comisión del crimen.

Para acreditar lo anterior, se contó con el testimonio voluntario del co acusado, Claudio Riveros Canales, quien informó al tribunal, en relación a los hechos de esta causa, que a él primero lo contactó Jairo Cortés, quien era amigo de su hijastro Matías, razón por la cual, el día sábado 16 de mayo del 2020, se acercó al sector de Glorias Navales, específicamente avenida Mar de Chile con pasaje Zenteno, y se encontró con ellos –Jairo y Matías-, acompañados de un tercero que no conocía, le dijeron que querían conversar con él “por una peguita”, y el Jairo le presentó al “Parce” -como apodaban a Víctor-, conversaron y el “Parce” le dijo que le habían dicho que “era bueno para el volante”, él le contestó “veamos de qué se trata” y el “Parce” le dijo “hay un millón de pesos” para ir “a darle una vueltita a una persona”, porque le había hecho un encargo su jefe, entendió que era “una pega”, quedaron de acuerdo, y después de eso intercambiaron números para estar en contacto. Posteriormente, durante la noche le llegó un mensaje del “Parce” diciéndole si lo podía pasar a buscar el día domingo, le dijo que sí, y al día siguiente lo pasó a buscar a Quilpué, a la altura de los moteles camino a lo Orozco, y se fueron al lugar al que quería ir el “Parce”, en Bosques de Montemar, en ese momento, el “Parce” le mostró un papel que tenía en su teléfono, y que decía “Bosques de Montemar” y un número de cuatro dígitos.

En concordancia con la declaración precedente, el testigo Jairo Cortés Córdova, quien a la época de los hechos arrendaba una habitación a Víctor Gutiérrez, declaró que “el Parce” le contó que “iba a matar a una persona por \$5.000.000.- millones de pesos”, exhibiéndole incluso el arma que utilizaría para dicho cometido. Agregó Jairo Cortés que Gutiérrez no le dijo si iba a hacer alguna actividad previa relacionada con la muerte de la persona, pero posteriormente, al efectuarse el ejercicio procesal previsto en el artículo 332 del Código Procesal Penal, se le exhibió la declaración que prestó ante la policía el día 20 de mayo del 2020 y leyó: “además, el Parce me contó que el día domingo iba a ir con el chofer a averiguar al lugar de Con Con, para ver la casa del viejo”, agregando el deponente que eso era así, que se refería al domingo de esa misma semana,



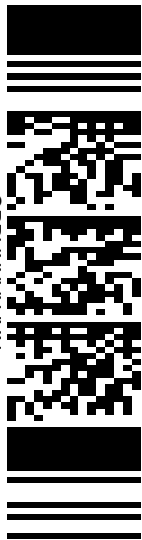
que efectivamente ese día vio a Gutiérrez salir temprano, y que creía que se refería a Claudio cuando dijo “el chofer”.

Luego, informó el testigo Cortés que ese mismo día, el “Parce” regresó como a las 3:00 de la tarde, y ahí “me contó que había ido a ver la casa del viejo al que tenía que pitearse junto al chofer Claudio, y que le había ido bien y que estaban listos para la pega el otro día”.

Se acreditó también que parte del trayecto realizado aquel 17 de mayo fue grabado en video por la acusada Melissa Palma con su teléfono celular.

En efecto, según declaró el Comisario López, al efectuar una revisión del teléfono celular que entregó voluntariamente Melissa Palma, y que identificó al serle exhibida la evidencia ofrecida con el N° 6 y N° 74 de otros medios de prueba, correspondiente a la NUE 6131146, levantada el 21 de mayo del 2020, teléfono celular marca Nokia modelo TA1149, se logró rescatar varias imágenes, e incluso un video que estaba directamente vinculado con el hecho que estaban investigando, donde claramente se podía apreciar que la imputada Palma Valdés iba al interior de un vehículo manejado por Claudio Riveros Canales, y en la posición de copiloto iba Víctor Gutiérrez Londoño, ese video capta el frontis del domicilio de Bosques de Montemar 1295 en dos instancias: de ida y de regreso, allí, casi al finalizar se puede escuchar la conversación que tenían los tres ocupantes del móvil, en que Palma hace referencia al posible trayecto de huida, se escucha también la voz de Gutiérrez Londoño haciendo referencia a que podían llevar un perro y dejarlo botado y también se escucha la voz de Claudio Riveros Canales, que hace referencia a la ubicación de las cámaras de seguridad que los podrían captar en el lugar.

En relación a la labor de extracción de esta información, se contó con el testimonio del perito Luis Carrasco Valladares, quien informó que mediante el oficio N°505 de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, de fecha 27 de agosto de 2020, le fue solicitado efectuar extracción de la información contenida en la papelera de fotos de Google que se contenían en el teléfono marca “Nokia” correspondiente a la NUE 6131146, del cual se extrajo un video grabado en la parte posterior de un vehículo en movimiento, que se inicia enfocando una casa esquina con muros y pilares de ladrillo color oscuro, reja, portón y puerta de tipo madera color café, y que avanza por una avenida que tiene doble sentido a una velocidad moderada enfocando las casas del sector. Esta información fue respaldada digitalmente, en un CD levantado por cadena NUE 6168934, y fue

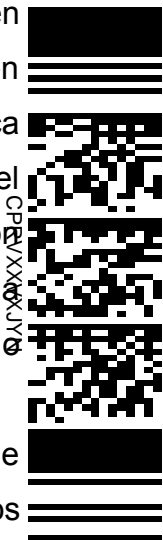


informado por informe técnico N°66-2020, de fecha 28 de agosto de 2020. Se exhibió al perito set de fotografías de otros medios de prueba N°71, describiendo en la N°1 una fotografía del procedimiento de acceso a la plataforma de la papelería contenida en el teléfono; en la N°2 un pantallazo de las imágenes contenidas en la papelería de fotos; en las N°3 y N° 4 una imagen en que aparece la mano de una persona adulta con uñas pintadas sosteniendo un arma sobre un cojín amarillo; en la N°5 la parte del GD, activación del archivo existente en la galería; N°6 , una impresión de pantalla del inicio del video, en las N° 7, N° 8, N° 9, N° 13 y N° 14 se ven imágenes congeladas del video, en que se advierte el trayecto y casas del recorrido, distinguiendo, específicamente en la N° 10 una casa de muros de ladrillo, reja y puerta de color café; en la N°11 describió una fijación del chofer del vehículo de sexo masculino; en la N°12 y N°15 se ve el perfil del hombre sentado en el asiento del copiloto del vehículo. Finalmente, se le exhibió de otros medios de prueba N° 72, y explicó que corresponde a un video que describe su mano en ejecución y que graba todo el procedimiento de extracción de la información.

En este mismo orden de ideas, se exhibió al Comisario López de otros medios de prueba, evidencia ofrecida con el N° 29 y N° 74 y el testigo señala que se ve una imagen del teléfono desde donde se extrajo el video, la imagen N° 7 de otros medios de prueba N° 30 también muestra el portón de la casa, en tanto, la fotografía N° 2 de otros medios de prueba N° 28 se trata de un pantallazo del video (otros medios de prueba N° 70) que coincide el acceso ya señalado.

Ahora bien, analizado este cúmulo de antecedentes, es posible acreditar que, el día 17 de mayo de 2020, estando ya en marcha el plan delictivo, Víctor Gutiérrez junto con su pareja, se trasladó específicamente hasta el domicilio de la víctima y sus alrededores, junto con el chofer que contactó para colaborar en dicho cometido, con el fin de efectuar un reconocimiento previo del sitio exacto en que se perpetraría el crimen al día siguiente, actividad que sin duda se enmarca dentro de las labores de vigilancia indispensables para facilitar la comisión del crimen, y que también acredita respecto del sicario, el elemento de premeditación que se viene analizando, en tanto efectúa una diligencia previa, dirigida a asegurar el éxito en la consumación del homicidio que le había encargado Renato López en la persona de la víctima.

De este modo, nos enfrentamos por una parte, a una acción directa de matar, consistente en dispararle a otro en la cabeza, pero, tal como señalaron los



intervinientes, a lo largo de la investigación sale a la luz quien se encontraba en las sombras, aquel que no estuvo físicamente en ese lugar, pero que sin duda fue quien desencadenó el delito, quien puso en marcha la conducta homicida del disparador, y es este “impulso activador del crimen” la conducta prohibida desplegada por López Fuentes y que ha tenido por acreditada el Tribunal, estimando en consecuencia, que todo es parte de un conjunto de acciones buscadas desde un inicio en un trabajo común, es decir, ambos agentes desplegaron actividades materiales constatables: uno en su rol de mandante, y autor inductor del crimen, y el segundo, en su calidad de mandatario y ejecutor material de los disparos, tal como se explicará más adelante a propósito del tipo de participación criminal, configurando sin duda respecto de ambos la calificante de premeditación desarrollada en los párrafos precedentes.” (Sic).

26°) Que atento a los fundamentos del tribunal para dar por establecidas las circunstancias segunda y quinta del artículo 391 N°1 del Código Penal, esto es, ejecutar el homicidio por premio o promesa remuneratoria y con premeditación conocida, citando al efecto –expresamente-, determinada doctrina, no cabe sino compartir sus argumentos para así haberlo decidido, no incurriendo el fallo, por consiguiente, en errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo, al decidir tener aquéllas por configuradas.

En cuanto al recurso de la defensa de Claudio Esteban Riveros Canales.

27°) Que el recurrente invoca la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. Expone que su representado fue condenado por 2 delitos; a saber, como autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal, por el delito de homicidio simple consumado, imponiéndose la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, y a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo como autor del artículo 15 N° 2 del delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, incurriéndose en una errónea aplicación del derecho, por dos motivos, que se plantean en forma separada: a) Errónea aplicación del derecho al estimar a su representado como autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal y no como cómplice, en lo concerniente al delito de homicidio simple. b) Errónea aplicación del derecho por no acoger la eximente especial de entrega voluntaria del arma, en lo concerniente al delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego. En cuanto al primero de los motivos, luego de reproducir el



considerando vigésimo del fallo, dice que “de los hechos acreditados, se puede concluir, en lo concerniente al delito de homicidio simple y a la participación de mi representado, que lo que se atribuyó a don Claudio Riveros Canales, respecto del delito de homicidio simple consumado, fue el realizar labores de transporte del autor material de los hechos en un vehículo motorizado, ya que se dio por acreditado que dicho autor material contactó a mi representado para que condujera un vehículo el día antes de los hechos y trasladara al autor material y a su pareja hasta el frontis del domicilio de la víctima y que el día de los hechos, en conocimiento del propósito delictivo del autor material, lo condujo y trasladó en un vehículo hasta el domicilio de la víctima, llegando a las 8:15, bajándose el autor ejecutor y ante la negativa de la víctima de atenderlo, Gutiérrez se retiró junto con Claudio Riveros en el mismo vehículo, regresando al referido domicilio alrededor de las 9:40 horas con la finalidad de consumir su propósito, lo que en definitiva realizó” (Sic). A continuación, transcribe el fundamento vigésimo noveno del fallo –donde se atribuye la participación-, y expresa que se ha incurrido en una errónea aplicación del derecho, porque: a) Sin perjuicio de no ser obligatoria para el tribunal, es necesario tener presente que tanto el Ministerio Público como los querellantes acusaron a su representado como cómplice del delito de homicidio simple, tesis que mantuvieron durante el juicio oral; y, b) La discusión jurídica se plantea, entonces, si los hechos acreditados implican una participación de don Claudio Riveros como autor del artículo 15 N° 3 del Código Penal o como cómplice del artículo 16 del mismo cuerpo legal. Copia las normas citadas y manifiesta que la primera parte del precepto inicial, es aquella que suele denominar “autor cooperador” implica un concierto y una facilitación de medios. Sostiene que sobre el primero de los requisitos se ha indicado que la coautoría supone un acuerdo de voluntades, un plan común y una esencialidad en la contribución del sujeto; que el acuerdo de voluntades debe ser previo, inequívoco y puede ser hasta tácito, y que este acuerdo de voluntades determina que cada sujeto toma parte en un hecho común, no en un hecho ajeno, citando luego cierta doctrina. Agrega que el plan, a su turno, exige que cada uno de los sujetos intervenga en el hecho habiendo convenido un papel a jugar en los hechos requiriéndose también una esencialidad en la contribución del sujeto, es decir, una contribución esencial para el conjunto del hecho, y que si se retira el coautor, no hay delito. Añade que “es indispensable que los distintos intervinientes presten a la realización del hecho una contribución que haga funcionar el plan



conjunto, que sea funcional a la realización del hecho, de tal manera que si uno se retira el proyecto fracasa, pero al mismo tiempo la actividad de cada cual es, a su vez, dependiente de que los restantes realicen la suya porque por sí sola es incapaz de conducir a la consumación”. Adiciona que facilitar los medios, a su turno, es otorgar aquello que permitirá realizar el delito, tanto en lo concerniente a los instrumentos materiales como al modo o manera de comisión, contribuyendo efectivamente a la realización del hecho. Refiere que a su turno, “la complicidad, que si bien tiene una definición legal más parca, implica también un acuerdo de voluntades para cooperar, es decir, obrar conjuntamente con otro, lo que implica que conoce un hecho y obra para realizarlo, pero implica sí la actuación en un hecho de otro o en un hecho ajeno.” (Sic). En seguida, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de esta Corte, afirmando que “las similitudes que aparecen entre el “autor cooperador” del artículo 15 N° 3 y el “cómplice” del artículo 16 del Código Penal, hacen que la doctrina y la jurisprudencia haya debido preocuparse del tema para poder resolver aquellos casos, como el de autos, en que existe discrepancia sobre si nos encontramos ante una u otra clase de participación penal.” (Sic); alude a la teoría del dominio del hecho y trae a colación otros autores, refiriéndose a las teorías de la determinación objetiva y positiva del hecho y de la imputación objetiva. A continuación, cita otro autor y sentencias de la Excma. Corte Suprema, concluyendo que “queda claro que la conducta atribuida a Riveros, esto es, transportar en un vehículo al autor material del homicidio, esto es, llevarlo y recogerlo, no puede sino ser estimada como un supuesto de complicidad.” (Sic). Más adelante, en lo que atañe al delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego –segundo motivo del arbitrio deducido-, indica que el tribunal desestimó la concurrencia de la atenuante especial prevista en la letra c) del artículo 17 de la ley N° 17.798, esto es, la entrega voluntaria del arma; copia parte del considerando trigésimo tercero de la sentencia y asevera que ésta, al resolver de ese modo, efectúa una errónea aplicación del derecho, dejando de aplicar al caso concreto el mencionado artículo, que consagra una eximente especial, de modo que de haberse aplicado dicho precepto legal al caso concreto, no debió imponerse ninguna sanción a su representado por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. Copia el artículo 14 letra c) inciso primero de la ley N° 17.798, cuyos requisitos analiza; luego, cita a cierto autor y asevera que en el caso de autos concurren todos los requisitos exigidos

CP/XXXXXX/7

por dicha disposición legal para dar lugar a la eximente especial, según los argumentos que señala.

28°) Que la sentencia impugnada, en sus considerandos vigésimo noveno y trigésimo primero, acerca de lo que ahora se cuestiona, establece:

VIGESIMO NOVENO: Participación culpable del acusado Claudio Riveros Canales en calidad de autor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 N° 3 del Código Penal, en el delito de homicidio, en grado de consumado, en la persona de Alejandro Correa Correa.

1.- Que, la misma prueba de cargo que ha sido explicada en el considerando decimoquinto supra, junto con aquella que se adicionará a continuación, ha permitido acreditar la participación criminal y culpable del acusado Claudio Riveros Canales, en el delito señalado.

Para asentar esta imputación, el Tribunal contó primeramente con el testimonio de doña Mónica Canessa Siclari, quien se encontraba en las inmediaciones del domicilio de Alejandro Correa en el momento que se perpetró el crimen, y luego de escuchar los tres disparos que se originaron en la esquina de calle Los Pellines con Bosques de Montemar, se asomó al ventanal de su casa y pudo advertir claramente a un hombre que pasó corriendo por la calle portando una pistola, llegó a una esquina, tomó el teléfono, llamó a alguien, y llegó un auto negro y se lo llevó.

Agregó que fue muy notorio que había un hombre de pie, un hombre en el suelo, y un tercero arrancando que llevaba una pistola en la mano, este último recorrió cerca de una cuadra y media, y en eso ella vio un auto negro que venía subiendo por Con Con, retiró al hombre de la esquina y se fueron. Esa persona que iba corriendo “pescó el teléfono” y llamó a alguien.

2.- Este episodio fue confirmado por la policía a través de las imágenes que captaron las diversas cámaras de seguridad, tanto particulares como municipales ubicadas en el sector, y que permitieron determinar que los hechores se trasladaban en un vehículo marca “Toyota”, modelo “Yaris”, de color negro, placa patente BXFJ.13. Se exhibió al oficial a cargo del caso imágenes N° 7 y N° 8 del set de imágenes N° 19 y el testigo señaló que se ve la fecha de 18 de mayo del 2020, la hora 9:37, y el sujeto que sale de la escena del crimen, luego se sube al vehículo y el taxi emprende la huida, destacando en ese auto las llantas muy particulares que tienen como “un aro salido”, las manillas, que son de color plateado, y el polarizado de las ventanas.

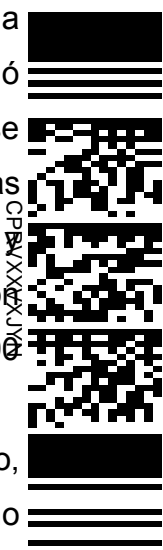


Con esa patente, según relató el comisario López, se hizo un trabajo de “cruces de información” e identificaron a su propietario, que se trataba de Mario Ramos, y a que línea pertenecía el taxi, de modo que se dispuso un dispositivo para encontrarlo, y en horas de la tarde lograron ubicar a un testigo con reserva de identidad, que también trabajaba como chofer de colectivo para Mario Ramos, y les dijo quién era la persona que estaba manejando ese taxi con esa patente, agregando que a este sujeto le decían “el ciego” y que en horas de la mañana de ese día, “el ciego” le comentó que se había “mandado una cagá” y necesitaba ir nuevamente al sector de Con Con para verificar cómo estaba la situación, porque ya sabía a través de la prensa y redes sociales que el caso “estaba tomando connotación”.

Posteriormente a la entrega de esta información, al testigo reservado se le exhibió un cuadro de reconocimiento fotográfico para individualizar al chofer del colectivo captado por las cámaras, logrando así individualizar a un sujeto de nombre Claudio Riveros Canales, que era el chofer del vehículo que se aprecia en los videos, y quien, según dijo aquel deponente, era el único que lo manejaba, afirmación ratificada a través del audio N° 2 y su respectiva transcripción del set de otros medios de prueba N° 90, extraído del aparato telefónico de Riveros Canales, en que el mismo acusado da cuenta de que se había cambiado de colectivo y que ahora está manejando “el Toyota Yaris”.

Luego, parte del equipo se trasladó hasta la garita de colectivos con el fin de ubicar “al ciego”, y en horas de la noche llegó el vehículo con Claudio Riveros, estaba solo, se le hizo un control de identidad y se le invitó a declarar a la Brigada de Homicidios de Viña del Mar, el accedió, fue y prestó declaración en calidad de imputado, previa lectura de sus derechos, ya que se le informó que conforme a los videos extraídos de las cámaras de seguridad, estaba vinculado a la muerte del señor Correa. Riveros se mostró llano a colaborar y entregó voluntariamente su vehículo: se trata del mismo taxi con placa patente que se observó en las imágenes N° 7 y N° 8 que le fueron exhibidas, mismas características: llantas, manillas de las puertas, placas patentes amarillas vidrios polarizados y cuya imagen también se encontró en la información obtenida del celular del acusado, según da cuenta la fotografía N° 7 del set N° 90 del auto de apertura.

Informó el policía, que ese día 18 de mayo del 2020, al dar su testimonio, Claudio Riveros Canales refirió cómo fue contactado por un sujeto colombiano



apodado “Parce” que le pidió que “le hiciera una carrera”, labor que ejecutó los días 17 y 18 de mayo del 2020. En relación al día del crimen, el acusado les dijo los lugares por donde transitaron, que fue a Quilpué a buscar al hombre colombiano, que pasaron por el Troncal Sur, que pagaron el peaje en forma manual, que luego fueron a Con Con, y que allí, cerca de un bandejón central su pasajero bajó, cruzó y llegó a una casa esquina, tocó la puerta pero no lo atendieron, regresó al auto, se dieron una vuelta y volvieron más tarde, cerca de las 9:20 de la mañana, entonces el “Parce” se bajó nuevamente y él se movió con su vehículo hasta una arteria cercana, y pasados unos minutos, el sujeto llegó agitado, se subió al auto y regresaron a Quilpué.

Al momento de declarar, Riveros Canales también entregó mediante acta voluntaria el dinero que se le había cancelado por la carrera: \$100.000.- (cien mil) pesos desglosados en cinco billetes de \$20.000.- mil pesos -que Rodrigo López reconoció en la imagen N° 2 del set 42 de otros medios de prueba-, un teléfono celular -que reconoció en como evidencia N°5 de otros medios de prueba y el vehículo ya mencionado.

Informó el policía, que el día 19 de mayo del 2020, en horas de la mañana se presentó nuevamente don Claudio Riveros Canales en la unidad, con el objetivo de ampliar su declaración, y entregó voluntariamente un arma de fuego y vestimentas que usó el “Parce” el 18 de mayo y que había encontrado bajo el asiento del copiloto, especies que el testigo identificó en las evidencias materiales signadas con los N° 16 y 17, e imágenes N° 17, N° 18 y N°22 que le mostró el fiscal. En su declaración complementaria, Riveros también les dijo que una vez que encontró esa arma al interior de su vehículo se la entregó a un amigo para que la guardara, de nombre Cristian, y después se la pidió para llevarla a la brigada de homicidios.

Se exhibió al comisario evidencia ofrecida como otros medios de prueba N° 5 y fotografía N° 2 del set N° 90 y el testigo señala que se trata de la NUE 6131133 que corresponde al teléfono Huawei de Claudio Riveros Canales, y NUE 5979409 de 19 de junio del 2020, consistentes en dos discos compactos que contienen el respaldo de su contenido. La imagen N° 4 del mismo set muestra los contactos extraídos del aparato celular de Claudio Riveros Canales, en el número 1 dice nombre de contacto “Par”, y número +56979589582, y 2 “Pituf” y su número de celular +569+87889488. El primer número corresponde al teléfono de Víctor Gutiérrez Londoño, respecto del cual se solicitó su interceptación



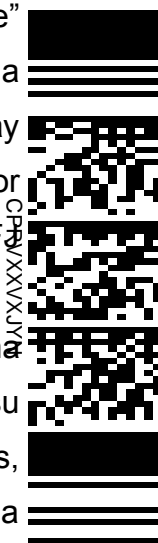
judicialmente, y el segundo a Cristian Morales, que es la persona que guardó el revolver que le entregó Claudio Riveros. Luego, en las imágenes N° 5 y N° 6 identificó las tablas dinámicas de llamadas del teléfono celular de Claudio Riveros con “Par”, de Víctor Gutiérrez Londoño, y con “Pituf”, respectivamente.

Al serle solicitado en juicio el comisario reconoció al acusado Claudio Riveros como el sujeto a quien se refirió en su declaración.

En relación a la extracción de datos desde aquel aparato móvil, se contó con el testimonio del perito Luis Alberto Carrasco Valladares, quien identificó de otros medios de prueba N° 5 uno de los teléfonos que sometió a su revisión, y en otros medios de prueba N°89, dos discos compactos, que contienen el soporte material de dicho análisis contenido en el informe N° 30-2020 que expuso en el juicio.

3.- A mayor abundamiento, el propio acusado Claudio Esteban Riveros Canales, en la oportunidad a que se hace alusión en el artículo 326 del Código Procesal Penal prestó declaración en el juicio voluntariamente y señaló que, el sábado 16 de mayo, su hijastro, Matías Márquez lo llamó para que fuera al sector de Glorias Navales, específicamente a avenida Mar de Chile con pasaje Zenteno, porque “querían conversar con él” y “no se podía hablar por teléfono”, cuando llegó, estaban Matías, Jairo -que es amigo de su hijastro- y una tercera persona que no conocía, al que apodaban “Parce” y que tenía acento colombiano. Este sujeto le comentó que le habían dicho que “era bueno para el volante”, y le preguntó si hacía carreras especiales en el colectivo, contestó que sí, y el “Parce” le preguntó si el día lunes 18 de mayo del 2020 le podía “hacer una peguita”, agregando “hay un millón de pesos”, para llevarlo de ida y vuelta, y que había que darle “una vueltita a una persona”, quedaron de acuerdo, intercambiaron los números de teléfono y durante la noche le llegó un mensaje del “Parce” diciéndole si lo podía pasar a buscar el día domingo, le dijo que sí, lo fue a buscar a Quilpué, a la altura antes de los moteles camino a lo Orozco, donde hay unos edificios en un paradero. En esa fecha él manejaba un colectivo a mirador de Reñaca y Glorias Navales, era un Toyota negro modelo Yaris patente BX F 13, el dueño era un carabinero de apellido Ramos.

Al día siguiente lo pasó a buscar y el “Parce” estaba esperándolo con una niña y una mascota, se subieron al auto y le mostró un papel a través de su teléfono que decía “Bosques de Montemar” con un número de cuatro dígitos, recuerda que también le mostró la cara de una persona, le dijo que era la



persona “de la vueltita”, refiriéndose a que era la persona del domicilio donde fueron, y ahora sabe que era don Alejandro. Llegaron a Bosques de Montemar, recorrieron las inmediaciones y después se retiraron y lo dejó en el mismo lugar donde lo había recogido, y acordaron que tenía que retirarlo el día lunes ahí mismo. La niña que llevó en su vehículo ese día, tanto de ida como de vuelta corresponde a la acusada Melissa Palma, a quien identificó en el juicio, y mientras estaban allá vio que estaba grabando con su celular las casas y el sector por donde pasaban.

Al día siguiente, lunes 18 de mayo, fue a buscar al “Parce” muy temprano en la mañana, cerca de las 6:50 horas y se dirigieron al lugar donde ocurrieron los hechos, allí llegaron cerca de las 8:30, se posicionaron detrás de un automóvil al frente de la casa, y el “Parce” le dijo que el “plan A” era que la víctima saliera de su domicilio, estuvieron un rato, pasaron unos minutos y le dijo “plan B”, se bajó del automóvil, se puso la pistola en el estómago, la guardó y caminó hacia allá, vio que tocó algo como un timbre pero se devolvió y le dijo que no lo quisieron atender, que tenían que regresar como a las 9:30, así que se fueron, “hicieron la hora” y volvieron cerca de las 9:40, cruzó un bandejón, y el “Parce” se bajó, en tanto él siguió su trayecto y más abajo hay un retorno, se devolvió, y cuando venía de subida “se lo topa al “Parce” en una esquina esperándolo”, se subió al auto, le dijo “arranca”, y se fueron, en el trayecto el “Parce” le dijo que no tenía donde guardar la pistola y él –acusado- le contestó que la dejaran en su casa, pero después él se la llevaba porque no quería tener problemas.

Durante el trayecto de vuelta, le preguntó qué pasaba con el tema de su pago, y el “Parce” le dijo que eso dependía si la persona fallecía o no, después el “Parce” le avisó que estaba “casi listo”, que se acercara a Viña, fue a Viña cerca de las 6:00 de la tarde, y a la altura de la subida de Agua Santa, el “Parce”, le pasó la plata, la contó, y pararon un colectivo para que los llevara a sus casas.

Al serle solicitado en juicio reconoció al acusado Víctor Alfonso Gutiérrez Londoño como el sujeto a quien individualizó como “Parce” en su declaración.

Así, con el mérito de la prueba señalada, aunada a la declaración voluntaria del acusado, fue posible acreditar que al acusado Claudio Esteban Riveros Canales le cupo participación como autor del delito de homicidio, previsto en el artículo 391 N°2 del código Penal en grado de consumado en la persona de Alejandro Correa, conforme lo previsto en el artículo 15 N°3 del Código Penal.

CPA/XXX/XX/YY

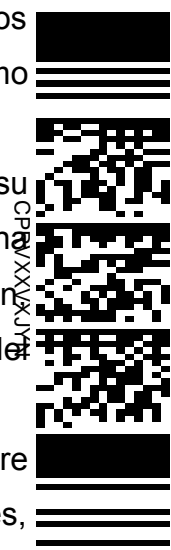
Ahora bien, como ya se informó, este Tribunal ha decidido rechazar las alegaciones de la defensa del acusado, y, disintiendo de la calificación jurídica esbozada por los propios persecutores en su acusación, ha estimado que la participación de Claudio Riveros en esta causa se enmarca de manera categórica y concluyente en la calidad de autor de homicidio del artículo 391 N° 2 del Código Penal, conforme al artículo 15 N° 3 del mismo cuerpo legal, al haberse acreditado, más allá de toda duda razonable que Riveros Canales se encontraba concertado con Gutiérrez Londoño para la ejecución del crimen, y en ese contexto, colaboró y facilitó los medios para llevar a efecto el hecho en los términos descritos en el presupuesto factico que funda la acusación fiscal.

Atendiendo las alegaciones de la defensa sobre el particular, es menester recurrir a la doctrina y la jurisprudencia para fundamentar la decisión del Tribunal, en orden a considerar a Claudio Riveros como coautor material del hecho típico referido. Así, el distinguido penalista y profesor Sr. Héctor Hernández Basualto, cuando trata la coautoría propiamente tal, ha sostenido que “Son coautores quienes ejecutan conjuntamente el delito. Cuándo se puede decir que tal es el caso y cómo está regulado en el Código es una cuestión muy discutida. Desde un punto de vista estrictamente doctrinario existe bastante consenso en cuanto a que los requisitos de la coautoría son la existencia de un acuerdo de voluntades y un aporte funcional al hecho común. (Cury, 611 ss.; Yáñez, 59 s.; Garrido, II, 408 ss.; implícitamente Politoff/ Matus / Ramírez, PG, 416 s.).” 6

Luego, resolviendo derechamente el asunto controvertido, el Tribunal entiende que las acciones realizadas por Riveros y Gutiérrez, asentadas en la motivación pertinente, son todas de naturaleza ejecutiva. Ambos, con al menos convergencia de voluntades, -la que se colige de los actos externos previos a la ejecución de los disparos- y con pleno dominio del hecho, realizaron actos ejecutivos propios que inequívocamente estaban destinados a un mismo propósito delictivo, la muerte de Alejandro Correa Correa.

Resulta de suma importancia señalar aquí que cada encartado hizo su parte en la obra común. Individualmente tuvieron la opción de obrar de una manera distinta, como por ejemplo huir del sitio de suceso o abortar la misión empero, no lo hicieron y siguieron adelante hasta la completa consumación del crimen.

a) Luego, en lo que dice relación con el acuerdo previo existente entre Riveros y Gutiérrez, ha de señalarse que, el propio acusado Riveros Canales,



declaró en el juicio la forma cómo, el día sábado 16 de mayo, por intermedio de un amigo de su hijastro de nombre Jairo conoció a un sujeto apodado “Parce”, quien le consultó si le podía “hacer una peguita”, y que consistía en “ir a darle una vueltita a una persona”, labor por la cual le pagaría la suma de \$1.000.000.- (un millón) de pesos.

-Desde ya resulta bastante llamativa la oferta hecha por Gutiérrez Londoño aquel día, pues, el propio Riveros reconoció que en un día normal de trabajo en el taxi colectivo, lograba recaudar alrededor de \$25.000.- mil pesos, en tanto Gutiérrez, solo por aquel traslado le ofrecía cuarenta veces más, razón por la cual, según el mismo Riveros reconoció, aquel ofrecimiento “no le causó felicidad”, porque “tenía la incertidumbre de qué sería”, pero “en su mente pensó que era algo malo por la cantidad”.

Esta afirmación, en relación a que el acusado Riveros desconocía exactamente en qué consistía el trabajo que le ofreció Gutiérrez, y que solo “sospechó” que se trataba de “algo malo” por la gran cantidad de dinero involucrada, resultó absolutamente desmentida en el juicio con la declaración del testigo Jairo Cortés, quien refirió que ya el día viernes anterior al crimen el “Parcero” le comentó que le habían dado una misión, y que cuando le preguntó de qué se trataba le dijo que “le habían encargado pitearse a un weon de Con Con” y que iba a necesitar un chofer, razón por la cual, el sábado 16 de mayo del 2020, Jairo presentó a Riveros con Víctor Gutiérrez e informó que después de haber conversado ambos, al volver a su casa en compañía del “Colombiano”, le preguntó cómo le había ido con el chofer, y este le dijo que le había ido bien, “que habían quedado de acuerdo para matar al weon”.

Cabe preguntarse en este punto, si Gutiérrez le dijo expresamente a su amigo Jairo que estaba embarcado en un plan para asesinar a una persona, ¿cómo creer que este plan no le fue revelado al chofer en el momento de contactarlo, en la medida que resultaba una pieza clave para ubicar a la víctima, y luego de cometido el crimen, huir rápidamente del lugar?

En este mismo orden de ideas, aportan un contexto en relación a aquel acuerdo previo entre Riveros y Gutiérrez que se viene analizando, el audio N° 3 y su respectiva transcripción del set de otros medios de prueba N° 90, exhibido por Rodrigo López extraído desde el aparato telefónico de Riveros Canales, de 17 de mayo del 2020, donde Riveros dice “tengo una wea guena hermano”, referido a que tiene “un trabajo bueno” por hacer. En el mismo sentido, en el audio y su

respectiva transcripción N° 6 del set de otros medios de prueba N° 90, Riveros señala “mijo aguánteme hasta mañana, mañana, mañana, mañana le voy a hacer un trabajito y ahí le cancelo toda la deuda”, lo que demuestra que Riveros ya sabe que al día siguiente, 18 de mayo tiene que hacer un trabajo, y que por esa “peguita” va a recibir un pago que le permitiría cancelar su deuda, idéntico mensaje contenido en el audio N° 7 y su respectiva transcripción.

Luego, en el audio y su respectiva transcripción N° 4 del set de otros medios de prueba N° 90, también extraído del aparato telefónico de Riveros Canales, se escucha a su pareja Luisa Burgos que le pregunta “¿Oye y hablaste con el Parce?, hablaste con él y qué onda?”, a lo que después Riveros responde, según da cuenta el audio N° 5 “Nos estamos poniendo de acuerdo para’ mañana, para’ ir a pegarle una vueltita”. Finalmente, en las imágenes N° 8 y 9 del set de otros medios de prueba N° 90 el testigo identificó un pantallazo extraído del teléfono de Claudio Riveros, plataforma de wasap, de 18 de mayo del 2020 donde se lee: “Moni. Mira. Salió ya. La noticia”, junto con una publicación de Facebook que hace referencia al baleo que recibió el señor Correa en las afueras de su propiedad, información que acredita la preocupación del acusado Riveros por la forma en que la prensa abordaba el caso, naturalmente inquieto por la posibilidad de verse involucrado en el crimen.

-A continuación, y nuevamente refutando la versión de Riveros en cuanto a que desconocía previamente la intención de Gutiérrez de asesinar a don Alejandro Correa, cabe recordar que después de la detención de Melissa Palma, e incautación de su teléfono celular, - que el comisario López identificó al serle exhibida evidencia material N° 6- la brigada del ciber crimen extrajo un video directamente vinculado con el hecho investigado, en el cual se podía apreciar que la imputada Palma Valdés iba al interior de un vehículo manejado por Claudio Riveros Canales, y en la posición de copiloto iba Víctor Gutiérrez Londoño. Ese video capta el frontis del domicilio de Bosques de Montemar 1295 en dos instancias: de ida y de regreso, y casi al finalizar se puede escuchar la conversación que tenían los tres ocupantes del móvil, en que Palma hace referencia a los posibles trayectos de huida, Víctor Gutiérrez Londoño manifiesta que podían llevar un perro y dejarlo botado como maniobra distractora, y también se escucha la voz de Claudio Riveros Canales que hace mención a las cámaras de seguridad que los podrían captar en el lugar, inquietud que no se explica en el caso de que solo se hubiera comprometido a realizar un traslado, o una “carrera”



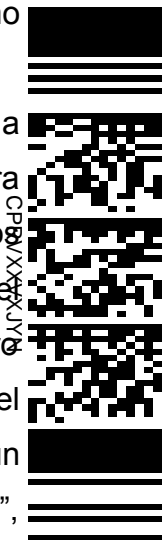
especial en el colectivo, sino que se condice más bien con la real preocupación que le asistía por evitar ser observados por las cámaras aledañas al sector en el momento de cometer el crimen.

Se exhibió a Rodrigo López set de imágenes N° 28 de otros medios de prueba, y en la N° 3 reconoció un pantallazo del video que se exhibió en audiencia, que corresponde al tramo final y se ve directamente la casa de don Alejandro Correa, en la N° 4, 5 y 6 se ve la secuencia de pantallazo anterior y se aprecian las casas contiguas, en tanto en la fotografía N° 7 se ve un pantallazo desde el interior del vehículo, al lado izquierdo se aprecia al chofer, imputado Claudio Riveros Canales y la parte interior del auto concuerda con la fijación fotográfica del mismo que se hizo por los peritos, así, no hay duda que se trata del mismo auto y se ve de copiloto a Víctor Gutiérrez y de conductor a Claudio Riveros.

Categórica resulta aquí, la versión que entregó Jairo Cortés en relación a las acciones desplegadas en conjunto por Riveros y Gutiérrez el día anterior al asesinato, al manifestar que el “Parce” le contó que el día domingo “iba a ir con el chofer –refiriéndose a Claudio- a averiguar el lugar de Con Con para ver la casa del viejo”. Después, en la tarde de aquel día domingo, según Jairo relató, el “Parcero” le contó “que había ido a ver la casa del viejo al que tenía que pitearse junto al chofer Claudio, y que le había ido bien y que estaban listos para la pega el otro día”.

- Finalmente, el día 18 de mayo, Claudio Riveros concurrió junto con Víctor Gutiérrez hasta la casa de Alejandro Correa, no una, sino dos veces, pues al primer intento el señor Correa no salió de su domicilio, y al volver, esperó que el primero ejecutara el delito para huir ambos del lugar, guardando incluso el arma y vestimentas que el “Parce” utilizó en ese momento, y que luego, él mismo entregó a la policía.

Ahora, aún si se diera fe al testimonio del acusado Riveros, en cuanto a que hasta aquí no existía un concierto previo con Víctor Gutiérrez Londoño para poner término a la vida de don Alejandro, lo cierto es que el propio Riveros Canales declaró ante el Tribunal que no recordaba si en el trayecto hacia el domicilio de la víctima el día 18 de mayo el “Parce” le habló de algún arma, pero sí que antes de bajarse la primera vez, vio que se levantó la polera, se metió el arma a la altura del cinturón, del estómago, y descendió del vehículo, “era un revolver”, sin embargo, como no lo atendieron, tuvieron que “hacer la hora”,



fueron a tomar desayuno y después nuevamente volvieron al lugar, lapso durante el cual Riveros ya tenía pleno conocimiento y adhesión al propósito delictivo del primero, consistente en dar muerte a Alejandro Correa Correa, pudiendo en ese momento el chofer retractarse del viaje comprometido, huir e incluso informar a la autoridad acerca del plan mortal que llevaba adelante el sicario, lo que no sucedió, sino que muy por el contrario, Claudio Riveros perseveró en aquel mediante el segundo traslado al domicilio de la víctima, asegurando así el éxito en la perpetración del crimen.

A mayor abundamiento, del análisis efectuado al celular de Claudio Riveros, y que este entregó voluntariamente a la policía en horas de la tarde del día 18 de mayo, se extrajeron audios donde Gutiérrez Londoño le enviaba mensajes a Riveros, indicándole por ejemplo, que “de haber sabido que el tipo era tan connotado hubiese cobrado más”, -según se desprende de los audios N° 1 y 4 de otros medios de prueba N° 26 y 27- y dándole instrucciones para que cambiara su teléfono y borrara los audios y mensajes recibidos, -de acuerdo al contenido de los audios N° 3 y N° 5 del set N° 90 incorporados por el fiscal-, expresiones que demuestran que Claudio Riveros conocía perfectamente la intención homicida del sicario, y que estaba involucrado a tal punto en su desarrollo y consumación, que el propio Gutiérrez le aconsejaba eliminar cualquier evidencia que los vinculara con el crimen.

b) Por último, la defensa del acusado Riveros en su alegato de cierre, y con el fin de fundar la participación de cómplice por la que venía acusado su representado, señaló que este nunca tuvo el dominio del hecho, y que su participación resulta del todo accesoria en relación a la conducta desplegada por el autor material de los disparos, descartando así que Claudio Riveros en algún momento hubiese facilitado los medios para la ejecución del delito, según requiere el artículo 15 N° 3 del Código Penal en relación a los requisitos de la coautoría que se vienen analizando.

Para desestimar este argumento, resulta imprescindible primero, repasar las acciones que desplegó Riveros el día del homicidio, ya que su colaboración no solo se limitó, -según arguyó su defensa- a trasladar al sicario hasta el domicilio de la víctima, sino que, al verse frustrada su consumación en el primer intento, y con pleno conocimiento de que Gutiérrez portaba un arma-de modo que conocía claramente el propósito por el que se encontraban allí- , se retiró junto al disparador del lugar, para luego regresar cerca de una hora después, y

CP/XXXXXX

dejar nuevamente al asesino en posición de abordar a la víctima, como efectivamente sucedió, consumando en ese momento el homicidio, para después retirarlo raudamente del sitio del suceso, huyendo juntos hacia la comuna de Quilpué.

A continuación, debe señalarse que resulta ser un hecho público y notorio que a la fecha en que se perpetró el delito, el día 20 de mayo del 2020, a través de resolución exenta del Ministerio de Salud N° 202, de fecha 22 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial ese mismo día, con ocasión de la pandemia producto del contagio por COVID 19 por la que atravesaba el país, todos los habitantes de Chile se encontraban severamente restringidos para movilizarse dentro de la ciudad, y para efectuar actividades en la vía pública cada persona debía contar con un pase de movilidad cuya entrega apenas permitía un número limitado de salidas durante la semana, lo que a su vez repercutía en una escasísima presencia de locomoción colectiva y de vehículos circulando en la calle, según el mismo Anderson Pirela reconoció al manifestar que mientras él transitaba ese día por calle Los Pellines, circulaban muy pocos autos: apenas vio dos vehículos que pasaron rápido: una camioneta gris y un auto negro. En ese contexto, es posible concluir que la actividad ejecutiva desplegada por Claudio Riveros, no resulta en ningún caso accesoria o baladí, pues existían severas restricciones para que las personas se trasladaran de un lugar a otro y la circulación de vehículos era mínima, de modo que llegar al lugar del homicidio, y asegurar la huida del mismo resultaba ser una colaboración esencial para asegurar el éxito en la perpetración del delito.

En este mismo orden de ideas, cabe señalar que salvo los dichos del propio Riveros Canales en este punto, tampoco se acreditó ningún tipo de amenaza directa de que este fuera víctima por parte del sicario, en caso de intentar anular el pacto entre ambos convenido, o derechamente la existencia de un amedrentamiento de tal envergadura por parte de Víctor Gutiérrez, que impidiera al chofer negarse a facilitar su vehículo, sino que, muy por el contrario, el traslado del asesino al lugar del crimen, en tres oportunidades distintas, se enmarcaba efectivamente en una colaboración directamente funcional a su consumación, asentando así la decisión de condena informada por el Tribunal que permite enmarcar su participación en la hipótesis descrita en el artículo 15 N° 3 del Código Penal.” (Sic).



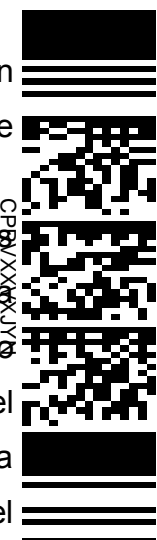
Más adelante, en el fundamento trigésimo primero –como ya se dijo-, respecto de la segunda alegación del recurrente, esto es, la concurrencia de la atenuante especial prevista en la letra c) del artículo 17 de la ley N° 17.798, relativa a la entrega voluntaria del arma, el tribunal razona:

“Finalmente, en este punto, es preciso señalar que la defensa del acusado Riveros Canales arguyó a su favor la eximente especial de la Letra C) del art 14 de la Ley de Control de armas, que establece la entrega voluntaria del arma sin que haya mediado autorización judicial o policial de ninguna especie. En lo pertinente, dicha norma señala: “En los delitos previstos en los artículos 9, 13 y 14, el tribunal podrá prescindir de toda pena si el imputado procede a la entrega voluntaria de las armas o elementos a las autoridades señaladas en el artículo 1°, sin que haya mediado actuación policial, judicial, o del Ministerio Público de ninguna especie”, esta petición será descartada por el Tribunal, al no concurrir los supuestos legales exigidos por la norma en comento, ya que, de la prueba aportada en el juicio, se acreditó que en el momento en que Claudio Riveros concurrió a la brigada de homicidios de esta ciudad, el día 19 de mayo del 2020, e hizo entrega del arma que había sido utilizada el día anterior para la perpetración del delito, ya se encontraba imputado por su participación en el homicidio calificado respecto de don Alejandro Correa, por estar vinculado en la conducción del vehículo en el que se trasladó el sicario al sitio del suceso, de modo que al 19 de mayo, tanto el Ministerio Público como la policía habían dado inicio a sendas actuaciones respecto de su persona, descartando de este modo la concurrencia a su favor de la hipótesis prevista por la norma legal invocada por su defensa.” (Sic).

29°) Que han de tenerse por reproducidos los considerandos noveno y décimo de la presente sentencia.

30°) Que el artículo 15 N° 3 del Código Penal, prescribe: “Se consideran autores: 3°. Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.”

31°) Que de acuerdo a lo razonado por el tribunal en los considerandos que han sido reproducidos, y habida consideración que en lo que atañe a esta causal los hechos que se tuvieron por acreditados no pueden modificarse, solo cabe concluir que la participación del acusado Claudio Riveros Canales en el delito de homicidio, en grado de consumado, en la persona de Alejandro Correa Correa, es efectivamente en calidad de autor, de acuerdo a lo dispuesto en el



artículo 15 N° 3 del Código Penal. Por los mismos motivos, no es posible aceptar que en el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego, por el que debe responder, le favorezca la eximente especial de la letra c) del artículo 14 de la Ley de Control de Armas N° 17.798, toda vez que se encuentra establecido como hecho por los sentenciadores, “que en el momento en que Claudio Riveros concurrió a la brigada de homicidios de esta ciudad, el día 19 de mayo del 2020, e hizo entrega del arma que había sido utilizada el día anterior para la perpetración del delito, ya se encontraba imputado por su participación en el homicidio calificado respecto de don Alejandro Correa, por estar vinculado en la conducción del vehículo en el que se trasladó el sicario al sitio del suceso, de modo que al 19 de mayo, tanto el Ministerio Público como la policía habían dado inicio a sendas actuaciones respecto de su persona”. Por consiguiente, no existe la errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo alegada por la defensa, lo que conlleva a desestimar la causal de nulidad invocada, y con ello, el recurso deducido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 372, 373 letra b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad interpuestos por los abogados señores Andrés Roldán Rivera, Claudio Uribe Hernández y Cristian Sandoval Díaz – Defensor Penal Público-, en representación de Melissa Fernanda Palma Valdés, Renato López Fuentes y Claudio Esteban Riveros Canales, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha dieciocho de abril del presente año, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, declarándose que ni ella ni el juicio oral que le precedió son nulos.

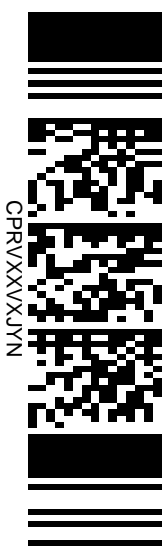
Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Carrasco.

N°Penal-1117-2022.

No firma la abogada integrante Sra. Pamela Prado López, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar sala el día de hoy.





CPRVXXXJYN

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por Ministro Alvaro Rodrigo Carrasco L. y Ministra Suplente Claudia Elena Parra V. Valparaíso, veintisiete de julio de dos mil veintidós.

En Valparaíso, a veintisiete de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

